

Marco legal de la responsabilidad social empresarial en Colombia

Presentado por:

Daniel Enrique Patiño Berdugo



Corporación Universidad De La Costa

Departamento De Derecho y Ciencias Políticas

Barranquilla

2018

Marco Legal De La Responsabilidad Social Empresarial En Colombia



Daniel Enrique Patiño Berdugo

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:

Abogado

Tutor:

Dr. Jassir Álvarez Estrada

Cotutor:

Laura Carrasquilla

Corporación Universidad De La Costa

Departamento De Derecho Y Ciencias Políticas

Barranquilla

2018

Nota de aceptación

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Barranquilla, 2018

Dedicatoria

A Dios, por darme la vocación en esta maravillosa carrera, como es el Derecho. A mi Madre, Marina Berdugo, a la que debo todo, quien ha sido mi guía y mi mejor maestra en la vida y en el derecho. A mi Padre, Daniel Patiño, por siempre brindarme su apoyo incondicional y animarme a ser mejor cada día. A mi esposa, Cindy Palencia, quien ha sido la mejor compañera de vida, y me ha impulsado a superar cada meta. A mis hermanos, Mario, Diego, Maria Cristina, Rafael y Maria Cristina Martinez, que siempre me han apoyado, dado consejo y por quienes siento orgullo y admiración. Y a toda mi familia por su amor incondicional, que nos permite estar siempre unidos.

Agradecimientos

Agradezco a mis profesores quienes se tomaron el arduo trabajo de transmitir sus diversos conocimientos sobre las diversas materias que cursé en mis estudios de derecho, especialmente al doctor Jassir Álvarez Estrada, quien supo encaminarme en mi última etapa y me ofreció sus conocimientos para la culminación del presente trabajo. Al doctor Alfredo Peña Salom, quien fue un gran apoyo para lograr la meta de convertirme en Abogado. Todo mi cariño para la CUC que fue un segundo hogar, del que me llevo no solo los conocimientos sino grandes recuerdos y amistades.

Contenido

Introducción	11
1. Planteamiento Del Problema	13
1.1. Descripción del problema.....	13
1.2. Formulación del problema	14
1.3. Objetivos	14
1.3.1. Objetivo general	14
1.3.2. Objetivos específicos.....	14
1.4. Justificación.....	14
1.5. Delimitación	15
1.5.1. Delimitación espacial	15
1.5.2. Delimitación temporal	16
2. Marco teórico	17
2.1. Concepto evolución y desarrollo de la responsabilidad social empresarial17	
2.1.1. Concepto de responsabilidad social empresarial	17
2.1.2. Definición de la RSE	18
2.2. Evolución histórica de la responsabilidad social.....	21
2.3. El pacto global entre las naciones unidas y el mundo del libre mercado	25
2.4. Principios del global compact	26
2.4.1. En Materia de Derechos Humanos	26
2.4.2. En Materia Laboral	28
2.4.3. En Materia Medioambiental	31
2.4.4. En Materia de Lucha Anticorrupción	33

3.	Evolución histórica de la responsabilidad social empresarial en Colombia	35
3.1.	Evolución de la RSE en Colombia en el siglo xx.....	35
3.1.1.	Primera Etapa	36
3.1.2.	Segunda Etapa	37
3.1.3.	Tercera Etapa.....	39
3.2.	Responsabilidad social empresarial en la legislación colombiana a partir de los principios del global compact.....	40
3.2.1.	En Materia de Derechos Humanos	41
3.2.2.	En Materia Laboral	42
3.2.3.	En materia Medio Ambiental.	44
3.2.4.	En Materia de Lucha Contra la Corrupción.....	45
4.	Marco jurídico – legal de la RSE en Colombia	47
4.1.	Regulación en el campo del medio ambiente	47
4.1.1.	Constitución Política.....	47
4.1.2.	Ordenamiento Jurídico.....	50
4.2.	Regulación en el campo de las relaciones laborales.....	55
4.2.1.	Constitución Política de Colombia	55
4.2.2.	Ordenamiento Jurídico	57
4.3.	Regulación en el campo comercial.....	60
4.4.	Regulación en el campo de la inversión social.....	64
4.4.1.	Educación	64
4.4.2.	Vivienda.....	66
4.4.3.	Cultura:	67
4.4.4.	Salud	68

5.	La responsabilidad social empresarial en el ámbito internacional.....	72
5.1.	Estados Unidos de Norteamérica.....	73
5.2.	Normatividad de la RSE en Europa	76
5.3.	Normatividad de la RSE en la India.....	77
5.4.	Normatividad de la RSE en Indonesia	79
5.5.	Desarrollos legales de la RSE en España.....	79
5.6.	Normatividad de la RSE en Perú	83
5.7.	Normatividad de la RSE en Argentina.....	85
6.	Diseño metodológico	88
6.1.	Tipo de investigación	88
6.2.	Método de investigación	88
6.3.	Técnica y fuentes de investigación.....	88
	Conclusiones.....	89
	Referencias	95

Resumen

El concepto más aceptado de la Responsabilidad Social Empresarial, es el de la Unión Europea, que la define como la integración voluntaria de temas sociales, ambientales, en las operaciones comerciales y las relaciones de la empresa con sus interlocutores. En el presente trabajo, se realizó el estudio sobre el alcance y efectividad de la RSE., con el fin de determinar hasta qué punto las disposiciones que rigen la materia en Colombia se encuentran reguladas; para ello, se entró a establecer los principales conceptos y teorías que han surgido al respecto de la RSE., analizando los elementos la componen y su desarrollo histórico tanto a nivel mundial como en Colombia, recopilando la normatividad relevante sobre los diferentes elementos que conforman la RSE., con el fin de establecer así si en su conjunto constituyen una regulación que dote de obligatoriedad a la RSE en Colombia, incluyendo también la enunciación de algunas reglamentaciones en el ámbito internacional, lo que sirvió para una contextualizar mejor la conclusión sobre el presente estudio. Entre las conclusiones destaca que se considera suficiente la legislación que existe en Colombia sobre los principales aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial, es decir, en realidad si existe un marco legal que dota, sin decirlo explícitamente, de obligatoriedad las prácticas Socialmente Responsables en las empresas que realizan actividades en el territorio nacional.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Historia, Colombia, Medio ambiente, Derecho Laboral

Abstract

The most accepted of the Corporate Social responsibility concept, is the European Union, which defines it as the voluntary integration of social, environmental, commercial operations and the relations of the company with its partners. In this work, the study was conducted on the scope and effectiveness of the CSR, in order to determine to what extent the provisions governing the matter in Colombia are regulated; therefore be entered to establish the main concepts and theories that have emerged regarding the CSR., analyzing the elements composing it and its historical development both globally and in Colombia, collecting the relevant regulations on the different elements that make up the CSR., in order to establish if as a whole constitute a regulation which mandatory to CSR in Colombia, including also the enunciation of some regulations in the international arena, which served for one better contextualize the conclusion on this study. Concludes that we considered sufficient legislation that exists in Colombia on the main aspects of Corporate Social responsibility to say that in reality if there is a legal framework that gives, without saying so explicitly, compulsory the Socially responsible practices in the companies that carry out activities in the national territory.

Keywords: Corporate Social responsibility, History, Colombia, Environment, Labour right

Introducción

La humanidad gira alrededor de la economía, del campo social, laboral y ambiental, entre otros factores, por lo que a través de los años se ha venido gestando la producción de teorías, modelos, normas, herramientas y guías, que en su conjunto han recibido el nombre de Responsabilidad Social Empresarial, lo que constituye el concepto de empresa, sus propósitos y consecuentemente de su función social, todo lo cual debe contar con un soporte jurídico.

En términos generales, la responsabilidad social empresarial (RSE) se aprecia desde cuatro ámbitos bien definidos, como son: el laboral, el económico, el ambiental y el social (Melo & Guerra, **2005**), los que son individualmente contemplados en el sistema jurídico de Colombia; no obstante, una hipótesis podría plantear que las normas que comprenden este abanico normativo, debería dar lugar a un marco legal que permita dotar de exigibilidad el concepto de RSE.

La RSE debe ir más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, llevando, por supuesto, su respeto y su estricto cumplimiento. Como su nombre lo indica, busca la excelencia en el núcleo de la empresa, atendiendo especialmente al capital humano, sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos y el bienestar de la comunidad que la rodea, se trata de que, si la empresa está constituida para generar riqueza, al mismo tiempo, remunerar con equidad a todos los factores o actores que intervienen en esa producción de riqueza (Vélez, 2001)

Para llegar a lo que hoy se identifica como RSE, se ha pasado por una gran diversidad de regulaciones e iniciativas que se toman como núcleo de trabajo investigativo con el fin de unificar y aplicar conocimientos que disminuyan la confusión existente y brinden orientación práctica para llegar a establecer si la normatividad existente sobre la RSE en Colombia, es

suficiente para que la empresa cumpla con una gestión socialmente responsable y para que el Estado pueda exigir su cumplimiento.

Los primeros antecedentes de RSE en Colombia se hallan a comienzos de siglo XX con el surgimiento de la Fundación Social en 1911 y la conformación de los principales gremios: la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en 1944, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en 1945, y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI) en 1951. A mediados del siglo XX la iglesia católica colombiana, junto con los gremios y los sindicatos fueron los principales actores sociales en Colombiaⁱ (Gutiérrez et al., 2006)

El presente trabajo busca establecer el marco jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia (RSE), mediante el estudio de las principales disposiciones proyectadas con ánimo normativo interno, así como las aplicables a partir del contexto internacional, pasando por las órbitas constitucional y jurisprudencial en sede del territorio colombiano.

1. Planteamiento Del Problema

1.1. Descripción del problema

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que fue surgiendo como una manifestación de ideas benéficas para vincular el desarrollo empresarial y sus políticas mercantiles a las personas y al ecosistema, con el fin de llevar a que las empresas desarrollen un postulado de solidaridad dentro del rol que desempeñan en la sociedad, lo que debe estar acompañado de su respectiva regulación legal.

No obstante, se sigue presentando una discusión, respecto a si la RSE debe tener un carácter de obligatoriedad o voluntario, pues de ser obligatorio requiere una regulación adecuada en donde el Estado pueda exigir a las empresas el cumplimiento de ciertas condiciones; pero, en cambio si se trata de una aplicación voluntaria, la RSE solo se traduciría al campo ético y no al legal.

Es por ello, que, en el presente trabajo, se trata de analizar cuál es la legislación que existe en Colombia relacionada con la RSE y si es ésta suficiente para afirmar que esta se encuentra dotada de obligatoriedad, para lo cual debe hacerse un recorrido por las regulaciones en el campo comercial, medio ambiente, laboral y de inversión social.

La hipótesis que guiará el presente informe de investigación es si el Estado Colombiano ha venido legislando frente a la responsabilidad social empresarial en lo relacionado con el mundo del trabajo, del medio ambiente y social, es posible decir que se encuentra delimitado un marco legal de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, o es necesaria una legislación que expresamente la regule.

1.2. Formulación del problema

¿Existe en Colombia un marco legal que regule los principales aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial- RSE?

1.3.Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Recopilar las normas que más relevantes regulan los principales aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial, para determinar la conformación de un Marco Legal de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia y determinar si se hace necesario una legislación que regule de manera expresa esta materia.

1.3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Desarrollar el Concepto de Responsabilidad Social Empresarial y los factores que la componen.
- ✓ Identificar los aspectos más relevantes de la evolución de la Responsabilidad Social en Colombia.
- ✓ Establecer el marco legal que abarca la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia.
- ✓ Analizar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en el ámbito internacional.
- ✓ Determinar si existe o no la necesidad de una legislación específica que regule la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia.

1.4. Justificación

El tema de la Responsabilidad Social Empresarial, tiene en la actualidad una significativa importancia dentro de las políticas y estrategias de proyección y extensión social y se constituye en una metodología eficiente para transformar la sociedad, ya que por medio de la

responsabilidad social se logra dar solución a circunstancias e inconvenientes que afectan a todos los miembros de la sociedad.

En el campo jurídico, más allá de la controversia de los objetivos con los que se proyecta la RSE, surge la necesidad de dilucidar la incorporación de la RSE dentro de un marco legal, debido a que existe un gran debate en torno a su regulación y exigibilidad, lo cual será planteado mediante la recopilación de las normas que actualmente regulan en Colombia aspectos de la RSE, para la conformación de un marco legal.

Se trata de un estudio innovador, puesto que se busca dar respuesta a las situaciones que actualmente afectan la RSE desde el punto de vista jurídico, dentro de la disyuntiva de si existe una regulación legal que obligue a las empresas a su aplicación o si su cumplimiento se deja por completo a la voluntad de las empresas socialmente responsables.

El desarrollo del tema del Marco Legal de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, en la práctica se presenta como una interesante fuente de investigación, teniendo en cuenta su importancia actual dentro de la sociedad y de varias ramas del derecho.

Cabe destacar que la presente investigación hace parte de los requisitos necesarios para optar al título de abogado que exige la Universidad de la Costa CUC de Barranquilla, y pretende presentar de una manera clara y concisa los principales aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial, que es un tema que ha sido muy debatido en los últimos años, debido a su importancia e impacto en la sociedad.

1.5. Delimitación

1.5.1. Delimitación espacial.

|La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla

1.5.2. Delimitación temporal

Los primeros antecedentes de RSE en Colombia se hallan a comienzos de siglo XX con el surgimiento de la Fundación Social en 1911, por ello se parte de allí y se complementa con la normatividad subsiguiente.

2. Marco teórico

2.1. Concepto evolución y desarrollo de la responsabilidad social empresarial

2.1.1. Concepto de responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tal como se le conoce hoy en día surgió por diferentes pronunciamientos, conceptos y documentos que se fueron constituyendo en el marco de referencia y herramientas para entender en qué consiste, cual su importancia y como darle aplicación en las empresas para convertirse en socialmente responsables.

Estas herramientas centran su atención en aspectos relacionados principalmente con los derechos laborales, humanos, medioambientales, entre otros, y de esta forma se fue creando un marco regulador, al cual, las organizaciones empresariales han ido suscribiéndose de forma voluntaria.

Existen vacíos que llevan a cuestionarse acerca del alcance y efectividad de la RSE., y a preguntarse hasta qué punto las disposiciones que rigen la materia en Colombia hacen de ella una cuestión obligatoria o no; es por ello que el presente estudio busca recopilar la normatividad más relevante en Colombia de los elementos que conforman la RSE y establecer si en su conjunto constituyen una regulación de la RSE.

Para ello, se hace necesario realizar una comparación entre la normatividad colombiana con algunas normas internacionales que regulan materias similares relacionados con la RSE, encontrándose muchas coincidencias en algunos elementos, tales como el alcance del concepto y el desarrollo de la figura en sí, lo cual sirve de sustento para una mejor comprensión del estudio propuesto.

Muchos han sido los criterios que se han utilizado en aras de definir la Responsabilidad Social Empresarial, lo que ha llevado a considerar la RSE con diferentes conceptos, pero que de manera general, todos contienen los mismos elementos esenciales para su comprensión y estudio.

2.1.2. Definición de la RSE

Se puede definir la Responsabilidad Social Empresarial, como la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas del sector en el cual se relaciona, teniendo en cuenta el desarrollo integral de sus empleados, el aporte a la comunidad que le permite crecer y desarrollarse y el cuidado, respeto y preservación del medio ambiente. (Comisión Europea, 2001)

Lo anterior, debido a que la responsabilidad social empresarial es al mismo tiempo interna y externa. La primera beneficia a sus empleados y la segunda tiene que ver con los demás sectores con los cuales la empresa tiene relación, como son sus clientes, proveedores, accionistas, distribuidores y con la sociedad y su entorno, en general.

Para la Organización Internacional del Trabajo (2006) la responsabilidad social de la empresa es “la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y en la que afirman los principios y valores por los que se rige, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores...”

Según el Libro Verde¹ de Responsabilidad Social de la Empresa Europea, la RSE, “...es la integración voluntaria de temas sociales, ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones de la empresa con sus interlocutores. Es integrar la actuación de la empresa en una sola estrategia con política de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, financiera, de comunicación, de capital humano y de mercadotecnia...” (Comisión Europea 2001. Pag. 7)

¹ Los libros Verdes son documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto.

De acuerdo a lo consignado en el Pacto Global (ONU, 2004), “Ser socialmente responsable implica todo un modo de hacer negocios, que se manifiesta a través de las relaciones con la comunidad, el trato con los empleados y el respeto al medio ambiente. El respeto a estos principios hace a las empresas más competitivas, pues así contribuyen a generar un ambiente de negocios favorable para la inversión, el desarrollo económico y la modernización del país.”

La Comisión de las Comunidades Europeas se reunió en julio de 2002 y entre sus diversos objetivos se encargó de estudiar las propuestas allegadas por los diversos sectores de la sociedad acerca del concepto de la RSE, en total se recibieron 250 respuestas que en su gran mayoría acogieron con satisfacción la definición de El Libro Verde.

Y por último, la Norma ISO 26000, define la Responsabilidad Social Empresarial como “Las acciones de una organización para asumir su responsabilidad por los impactos que sus actividades tienen en la sociedad y el ambiente, las cuales deben ser consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible; estar basadas en el cuidado ético y cumplimiento con las leyes aplicables e instrumentos intergubernamentales y estar integradas en las actividades cotidianas de la organización” (ISO,2010)

Como puede apreciarse, no existe una definición única de la expresión RSE, sin embargo en todas se describe una amplia variedad de conceptos de orden económico, laboral, social y medioambiental, que en principio no se basan exclusivamente en requisitos legalmente obligatorios y por lo tanto son, en su mayoría, son de naturaleza voluntaria, pero que también son materias legisladas y que por lo tanto se apoyan en las normas que el Estado ha emitido sobre cada una de las materias que abarca el concepto de RSE.

De conformidad con lo antes analizado, se encuentra que la definición más completa de la RSE es la adoptada por la Unión Europea en El Libro Verde (2001), ya que ésta integra las

principales características de la RSE, los diferentes campos que abarca, coincidentes con las normas legales aplicables a cada uno de ellos.

De acuerdo a la Comisión de las Comunidades Europeas (2002), se deducen los siguientes factores que la conforman:

1) La RSE es un comportamiento voluntario que va más allá de las obligaciones jurídicas, por cuanto a largo plazo se convierte en un beneficio para los intereses de la propia empresa.

2) La RSE está íntimamente ligada con el concepto de desarrollo sostenible² gracias a que las empresas deben integrar dentro de sus actividades las consecuencias ambientales, sociales y económicas.

3) La RSE no es algo optativo que se deba añadir a las actividades principales de la empresa sino que afecta directamente su gestión, por lo que se convierte en un comportamiento legal o normativo.³

Se aprecia en el desarrollo del concepto de RSE, que ésta se ha dividido en cuatro campos dentro de los cuales se desarrolla, estas subdivisiones son producto de los aspectos a los que va dirigida y que merecen protección legal, sin desconocer que en conjunto ayudan a mejorar la producción de bienes o servicios y a cumplir con una verdadera función social.

Estos cuatro campos son:

- 1) Responsabilidad Social en el Medio Ambiente;
- 2) Responsabilidad Social en las Relaciones Laborales;

² Es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. (Informe *Nuestro futuro en común o El informe Brundtland* (en Español). 20 Marzo 1987. ONU)

³ Estos elementos son tomados del comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas relativa a la Responsabilidad Social de las Empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas, 2 de Julio de 2002. En:
[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20021111/com\(2002\)347_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20021111/com(2002)347_ES.pdf)

3) Responsabilidad Social en el campo Comercial;

4) Responsabilidad Social en la Inversión Social, la cual se subdivide en Educación, Cultura, Vivienda y Salud. (Melo O. & Guerra J., “una propuesta para la regulación de la responsabilidad social empresarial del sector privado en Colombia” Pontificia universidad javeriana. 2005)

2.2. Evolución histórica de la responsabilidad social

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial, tiene una larga y variada historia, no obstante, es posible seguir su evolución a través de que existe mucha información que evidencia de la preocupación que por siglos han tenido las empresas para ser recibidas en la comunidad o sociedad donde desarrollan sus negocios.

Para empezar a hablar de Responsabilidad Social Empresarial –RSE-, es importante partir de los orígenes que tuvo este concepto, por lo que a continuación se presenta la información que fue considerada relevante para establecer el desarrollo de la RSE, en la que se trata de presentar sus inicios y evolución en el tiempo.

El origen de la responsabilidad social empresarial data de tiempos antes de Cristo como se puede apreciar en el artículo “Revisión de los orígenes de la responsabilidad social empresarial en el sector salud en Colombia”, (Pérez & Morales, 2011) donde presentan los inicios del concepto de Responsabilidad Social empresarial, indicando que: "Zaratustra, primer filósofo de la humanidad, quien nació el 26 de Marzo de 1767 AC, en la Antigua Persia, en su lengua natal el Avesta, propuso el término "Vohû Khshathra Vairya" para dar origen a lo que en la actualidad conocemos como responsabilidad social.

En su época, Zaratustra era un exitoso empresario dedicado a la ganadería y a la cría de caballos. En adición, Zaratustra dedicó su tiempo a desarrollar una filosofía basada en la

responsabilidad social y en tres pilares fundamentales que el distinguió como "buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones".

Al definir su filosofía de responsabilidad social, Zaratustra tuvo que enfrentar grandes dificultades y hasta arriesgar su vida para convencer al rey de Persia Kavi Vishtaspa. Le tomo a Zaratustra dos años de rigurosa perseverancia para deliberar y hacer llegar el conocimiento sobre responsabilidad social al rey y a la reina, a la corte y a su comunidad. Finalmente lo logró y el mensaje se extendió por todo el imperio persa.

Zaratustra propuso sus estrategias de responsabilidad social en el primer tratado de ética que conoció la humanidad: Los Gathas.

En este tratado que contempla el tema de la responsabilidad social, el mencionado filósofo declara que cada persona debe escoger servir a la sociedad y al mundo viviente. El mensaje propone un progreso humano a través de la armonía con la naturaleza y la igualdad del hombre y la mujer. La sociedad debe basarse en la familia, el distrito, el estado, el país y el mundo, sin que exista superioridad racial.

En las culturas griega y romana las actividades comerciales fueron consideradas como un "mal necesario" apareciendo restricciones filosóficas sobre el trabajo de los mercaderes. Posteriormente, en la edad media continúan las restricciones religiosas planteadas por la iglesia católica que consideraba como despreciables a las actividades comerciales y de negocios. (Pérez & Ordoñez, 2011)

Hacia el siglo XIII, ante el crecimiento del comercio en las ciudades europeas, Santo Tomás de Aquino estableció el concepto del precio justo determinado por los mercados y los márgenes de utilidad razonables obtenidos en el proceso de comercio.

La ideología Judía favorable al capitalismo, la reforma y el nacimiento de la ética protestante hacen que el comercio ya no sea visto como una labor denigrante. Entre los siglos XV y XIX el comercio y las industrias crecen de forma sostenida, convirtiendo a la ética capitalista en un eje fundamental del desarrollo de la humanidad (Schwalb & García, 2003.).

La documentación acerca de la responsabilidad social, sin embargo, es en gran parte producto del siglo XX, especialmente en los últimos 50 años. Además, se pueden apreciar huellas de RSE alrededor del mundo, especialmente en países desarrollados, en donde los escritos al respecto han sido más notables y prolíferos, en especial en los Estados Unidos donde se ha acumulado una cantidad notable de literatura sobre el tema, pero también se ha apreciado que las nociones relacionadas con la teoría y la práctica de RSE pudieron ser desarrolladas en otros países en diferentes épocas.

En 1953 Bowen publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman”, una especie de “biblia” de la responsabilidad social empresarial. En este libro, tal vez se definió por primera vez a la responsabilidad social como “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad, y creía que la responsabilidad social era una idea voluntaria de los empresarios para intentar contrarrestar los problemas económicos y alcanzar los objetivos de su organización. Bowen citó la encuesta realizada por la revista fortune (1946, citado en Bowen, 1953, p 44) en la cual los editores de la revista pensaron que la RSE o la conciencia social de los administradores, significaba que los empresarios eran responsables de sus acciones en una esfera más amplia que lo dispuesto en sus estados de pérdidas y ganancias.

La publicación del libro de Howard R. Bowen “*responsabilidad social del empresario*” indica el comienzo del periodo moderno de la literatura sobre el tema. El trabajo de Bowen en 1953 surgió de la creencia de que varios cientos de grandes empresarios eran el centro vital de poder y toma de decisiones y que los actos de estas firmas tocarían la vida de los ciudadanos en muchas maneras. Entre las muchas preguntas que hace Bowen, una es de especial importancia. El apunta “¿Qué responsabilidades con la sociedad pueden razonablemente asumir los empresarios?”

En ese orden de ideas, Núñez y Ravina (2017), los empresarios deben caracterizar un modelo de gobernanza que garanticen el cumplimiento legal de los valores éticos que establecen los diferentes códigos de autorregulación que les permita evidenciar prácticas socialmente responsables.

Fisher (2004) afirma que la evolución del concepto moderno de responsabilidad social empresarial ha sido descrita por Archie Carroll en los años 50, de acuerdo a Carroll, una literatura formal en el tema comenzó a desarrollarse. Durante los años 60 y 70, las definiciones de RSE se expandieron y proliferaron. El enfoque en investigación empírica y temas alternativos tales como el de desempeño en RSE y la teoría de los stakeholders⁴ marcaron los años 80. Este enfoque continuo en los 90 hasta el presente con el concepto de RSE suministrando las bases o punto de partida para conceptos y temas relacionados. Paralelamente a la investigación en el área de RSE, los investigadores del ámbito gerencial comenzaron a estudiar ética empresarial en los 60 y al principio fue dicho que esto era simplemente otra moda gerencial, sin embargo, el interés

⁴ Una **parte interesada** (del inglés *stakeholder*) hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada. Las partes interesadas podrían ser los trabajadores de esa organización, sus accionistas, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, proveedores de capital, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc.

en la ética empresarial ha aumentado desde ese entonces (Trevino y Nelson, 1999). (como se citó en Perez & Ordoñez, 2011).

“El verdadero sentido de la RSE se centra en el desarrollo de las diferentes actividades económicas, utilizando la ética en los negocios como punto de partida, la cual debe ir por el camino de la conservación del medio ambiente, el bienestar de la sociedad y el crecimiento económico” (Hernández y Jiménez; 2015:12).

2.3. El pacto global entre las naciones unidas y el mundo del libre mercado

Uno de los orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surgió de manera objetiva de la iniciativa del “Pacto Global” (*Global Compact*) entre las Naciones Unidas y el mundo del libre mercado que fue propuesto por el Secretario General de Naciones Unidas, el Señor Kofi Annan, en el FORO ECONOMICO MUNDIAL, celebrado en Davos, Suiza, el 31 de enero de 1999.

Es por ello, que es de importancia realizar una aproximación histórica de la responsabilidad social empresarial y balance social en el plano mundial, a partir del Pacto Global

La perspectiva teleológica del Pacto Global (Naciones Unidas, 1999) es promover el diálogo social para la constitución de una ciudadanía corporativa global, que posibilite conciliar intereses de empresas, con demandas y valores de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), sobre la base de 10 principios que transversalizan el conjunto de actividades que materializan las empresas y que están relacionados con los valores fundamentales en materia de:

- Derechos Humanos
- Normas Laborales

- Medio Ambiente
- Lucha contra la corrupción

En su fase operacional su finalidad es posibilitar a todos los pueblos del mundo compartir y acceder a los beneficios de la globalización de la economía e inyectar en el libre mercado mundial valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas de los humanos.

2.4. Principios del global compact

El Global Compact se constituye en un instrumento de libre adhesión para empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que aplican los Diez Principios que lo integran en sus estrategias y operaciones. Estos Principios son:

2.4.1. En Materia de Derechos Humanos

En materia de Derechos Humanos, el Global Compact se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948. El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares internacionales mínimos para la protección de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Por la naturaleza fundamental de esta Declaración es considerada ley internacional común por lo que no es necesaria su suscripción por parte de un determinado Estado para ser considerada requisito mínimo legal exigible.

- Principio I: Protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente

En cumplimiento de este, los derechos humanos deberán ser parte del núcleo esencial de valores de la organización, tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia y en relación con sus proveedores y empresas aliadas. Las empresas que operan en países donde el respeto por los derechos humanos es insuficiente, deberán aprovechar su presencia en

ellos para promover el apoyo a los mismos y exigir el cumplimiento de la ley; realizarán informes sobre los avances en materia de derechos humanos en la actividad del negocio y discutirán los resultados con los grupos afectados (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004).

- Principio II: Evitar verse involucrado o ser cómplice en abusos a los DDHH

La complicidad en abusos a los derechos humanos es la colaboración con un Estado en la vulneración de los derechos humanos (Complicidad directa); la obtención de beneficios relacionados con los abusos cometidos por un tercero en cuestiones de derechos humanos (Complicidad por beneficio indirecto), y la pasividad o aceptación de las empresas de prácticas que vulneran los derechos humanos por parte de las autoridades de un país (Complicidad silenciada). (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.30).

Este principio conlleva el deber de abstenerse de financiar grupos armados al margen de la ley y en caso de que se facilite apoyo financiero o material a los agentes de protección de la ley o cuerpos de seguridad, establecer límites claros y precisos que garanticen la no vulneración de los derechos humanos y el respeto de las directrices generales internacionales y las exigencias básicas sobre el uso de la fuerza², así como condenar privada y públicamente los abusos sistemáticos y continuados cometidos en el ámbito de los derechos humanos (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 33).

Con posterioridad al Global Compact, en el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos presentados por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, y quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas frente los derechos humanos. Aunque dichos principios no tienen por sí mismos un carácter jurídicamente

vinculante, incluyen aspectos que se contemplan de diversas formas en la legislación nacional e internacional (Naciones Unidas, 2011, p. 6).

Este Marco se apoya en los tres pilares siguientes: 1). El deber del Estado de proteger los derechos humanos; 2). La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y 3). La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

El primero está asociado con el deber que tienen los Estados de proteger a todas las personas en su territorio contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. En este sentido debe adoptar las medidas apropiadas encaminadas a prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos, por medio políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

El segundo pilar hace relación a que las empresas deben abstenerse de violar los derechos humanos de terceros y responder por las consecuencias negativas en materia de derechos humanos en las que haya tenido participación.

El tercero señala que los Estados deben tomar medidas judiciales, administrativas o legislativas que garanticen una reparación eficaz cuando se presenten abusos contra los derechos humanos en su territorio o en su jurisdicción.

2.4.2. En Materia Laboral

- Principio III: Apoyo a la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

Este principio hace referencia a que las empresas deben garantizar que los trabajadores puedan constituir un sindicato y afiliarse a uno de su elección sin temor a sufrir represalias; garantizar la neutralidad en las decisiones sobre promociones, despidos o traslados; facilitar

espacios físicos para que los representantes de los trabajadores puedan realizar su labor; la posibilidad de cobrar cuotas de afiliación dentro de la empresa; la colocación de carteles informativos y la libre distribución de documentos sindicales, así como tiempo retribuido dentro del horario laboral para dedicarlo a actividades sindicales (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.51).

Implica el reconocimiento de la negociación colectiva como foro constructivo para debatir las condiciones de trabajo y para el abordaje de cualquier problema o necesidad de una manera preventiva, incluyendo reestructuraciones y necesidades de formación, seguridad y sanidad, condiciones de trabajo, así como la facilitación de la información necesaria para que una negociación adquiera pleno sentido. La empresa deberá apoyar el establecimiento y buen funcionamiento de los sindicatos; preservar la seguridad de sus líderes, especialmente en países con cobertura legal insuficiente (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.52).

- Principio IV: Apoyo a la supresión de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

El trabajo forzoso u obligatorio se define como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se ofrece voluntariamente". El trabajo forzoso constituye una violación a los derechos humanos y es una conducta rechazada por la comunidad internacional por reducir el nivel de productividad, retardar el desarrollo adecuado de los recursos humanos y frenar el crecimiento económico de la sociedad en su conjunto, y poner en peligro las inversiones extranjeras (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004).

Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por

ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente y los trabajadores deben tener la libertad para marcharse siguiendo los cauces establecidos legalmente.

- Principio V. Apoyo a la abolición efectiva del trabajo infantil

Los convenios de la OIT recomiendan una edad mínima para la admisión en el empleo que no debe ser inferior a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria y en cualquier caso nunca inferior a los 15 años. Sin embargo, en países en los que las facilidades educativas son menores, la edad permitida puede ser menor: de 14 años.

En desarrollo de este principio las empresas deberán hacer cumplir las recomendaciones sobre edades mínimas de la legislación laboral a nivel nacional y, cuando la ley nacional resulte insuficiente, tener en cuenta la normativa internacional al respecto; demandar de los subcontratistas, proveedores y aliados empresariales que combatan el trabajo infantil; desarrollar mecanismos para detectar el trabajo infantil; así como garantizar empleo y salarios dignos a todos los adultos trabajadores de forma que no deban enviar a sus hijos a trabajar (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 60).

- Principio VI: Apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación

Se define discriminación en el empleo y la ocupación como

(...) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trabajo en el empleo y la ocupación. (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 61)

Para eliminar la discriminación en materia de empleo, las empresas deberán adoptar políticas y procedimientos tendientes a que la contratación, formación y promoción del personal

obedezcan a las capacidades, conocimientos y experiencia personales. Asimismo, deberán constatar que los requisitos particulares de cada cargo sean realmente necesarios a fin de evitar desventajas sistemáticas a determinados grupos; llevar archivos actualizados con la formación y promoción del personal contratado que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo; contar con estructuras tendientes a detectar casos de discriminación y canales de comunicación (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, pp. 65-66).

2.4.3. En Materia Medioambiental

- Principio VII: Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales

El concepto preventivo surge en 1970 en la República Federal de Alemania en relación con la Ley del Aire Limpio, y desde entonces se convirtió en un principio aceptado en la Unión Europea y forma parte del Derecho Medioambiental Internacional. El concepto alemán de Vorsorgprinzip encierra la noción de prevención de riesgos, efectividad de costos, responsabilidades éticas hacia el medioambiente y limitaciones ocasionales del conocimiento humano.

El principio de prevención conlleva la adopción de medidas tendientes a evitar el deterioro ambiental, incluso en el caso de que no se dispongan de pruebas científicamente demostradas del grado del daño que pueda causar determinada actividad a los recursos naturales. Conforme a este deberán tenerse siempre en cuenta los riesgos que deberán afrontar las generaciones futuras si se ponen en peligro los ecosistemas de vida esenciales, de tal forma que aquellos que emprendan una actividad o que realicen alteraciones en un entorno determinado deberán demostrar que no causan daños al medioambiente (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 86).

- Principio VIII: Fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental

Este principio conlleva dos aspectos; por un lado, se encuentra la promoción del cuidado del medioambiente a fin de que los procesos productivos se den de tal manera que no se afecten los ecosistemas y, por el otro, la obligación del pago de la deuda ecológica o compensación por errores de juicio pasados, tal como indica la noción de "responsabilidad común pero diferenciada" recogida en el marco de trabajo de las Naciones Unidas.

En desarrollo de este principio, una empresa puede optar por: Implementar la Declaración Internacional sobre Producción Limpia; trabajar con proveedores el comportamiento medioambiental; incluir la "triple cadena de valor" del desarrollo sostenible en la política empresarial -prosperidad económica, calidad medioambiental y justicia social- ; establecer objetivos cuantificables; desarrollar indicadores de sostenibilidad; cuantificar, monitorear e informar sobre progresos en la incorporación de principios de sostenibilidad a las prácticas empresariales; adoptar códigos de conducta voluntarios y garantizar la transparencia y el diálogo con los grupo de interés (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 94).

Igualmente se debe considerar que la producción sostenible debe ser complementada con políticas activas de promoción del consumo sustentable. Esto debe apoyarse en la generación y comunicación de información genuina sobre los aspectos sociales y ambientales de todo el proceso productivo, de modo de que las pautas de consumo puedan modificarse.

- Principio IX: Desarrollo y difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente

Este principio supone una política empresarial sobre el uso de tecnologías limpias, la difusión entre los grupos de interés del comportamiento medioambiental; la reorientación de la investigación y el desarrollo hacia un diseño por la sostenibilidad; la utilización del análisis del

ciclo de vida en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, teniendo en cuenta los impactos de la fabricación, uso y deposición final de estos; el empleo de informes de tecnología medioambiental; la revisión de los criterios de inversión y política de fuentes de proveedores que garanticen en sus ofertas un mínimo de criterios de protección ambiental (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 97).

2.4.4. En Materia de Lucha Anticorrupción

- Principio X: Lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

Como reflejo del Convenio contra la Corrupción de las Naciones Unidas (2004), durante la Cumbre de Líderes del Pacto Global, se anunció que a partir de ese momento, el Grupo del Pacto Global incluiría un décimo principio en contra de la corrupción. "La adopción de este principio compromete a los participantes del Pacto Global, no solamente a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos para abordar el tema de la corrupción".

Entre las medidas contempladas para la concreción de este principio se hallan la introducción de programas y políticas de anticorrupción; la presentación de un informe sobre el trabajo de la organización en contra de la corrupción, el cual debe estar incluido en la Comunicación Anual sobre Avance; la comunicación de experiencias y buenas prácticas; la demanda de colaboración con los pares en la industria para encontrar soluciones en forma conjunta; la colaboración con Transparencia Internacional y con la Cámara de Comercio Internacional; el acogimiento a los Pactos de Integridad de Transparencia Internacional o adhiriendo a la iniciativa de EITI, entre otras.

Las iniciativas relacionadas con la Lucha Contra la Corrupción se originaron en el Mensaje en la ceremonia inaugural de la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la

Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción Mérida, México (2003), Pronunciado por el Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto para Asuntos Legales.

3. Evolución histórica de la responsabilidad social empresarial en Colombia

En Colombia el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) fue surgiendo de manera espontánea, inicialmente como proyección de algunos empresarios que consideraron que, mejorando las condiciones laborales y el entorno de la comunidad, podían además de aportar bienestar a la sociedad obtener mejores resultados en sus empresas. De esas inquietudes surgieron importantes avances en el campo laboral, de la educación, de la salud, del medio ambiente y como consecuencia de ello, un mejoramiento social.

3.1. Evolución de la RSE en Colombia en el siglo xx

La evolución de la RSE en Colombia desde inicios del siglo pasado puede estudiarse a través de tres etapas: la primera de 1900-1960, en donde la Iglesia era el principal destinatario de las donaciones empresariales, en cuya etapa se creó la Fundación Social y los principales gremios del país protagonizaron el diseño y ejecución de dichas políticas, la segunda etapa 1960- 1993: fue la época en que se crearon las grandes fundaciones que hoy se destacan en el ámbito de la RSE. La Tercera etapa a partir de 1.993, es la época en la que el concepto de RSE empezó a tomar fuerza de manera generalizada. Se creó el Consejo Gremial Nacional, que en 1993 decidió “reorganizar y fortalecer la función social de los gremios” (Gutiérrez, Avella y Villar, 2006).

Adicionalmente, se crearon corporaciones de origen privado destinadas a promover la RSE; y el interés por la RSE se multiplicó exponencialmente entre el sector privado colombiano. Se destacan la adhesión de empresas colombianas a los foros internacionales de promoción a la RSE y la coordinación de políticas nacionales con las tendencias internacionales en materia de protección de derechos humanos, medio ambiente y mejora en la calidad de vida de los trabajadores.

3.1.1. Primera Etapa

En Colombia tenemos casos que han sido pioneros en la Responsabilidad Social Empresarial, como por ejemplo la compañía BELC - Bogotá Electric Light Company, hoy Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, que, desde los inicios del siglo XX, dentro de su actividad normal, contaban con una capacitación para los empleados, quienes eran campesinos de la región y adicional a esto, fundaron una escuela para que los hijos de los empleados se educaran en forma gratuita (Gómez Casabianca, 2011).

Otro ejemplo es la compañía Cementos Samper, empresa fundada en 1909, ellos organizaron el barrio Sans Facons, al norte de Bogotá y contaban con una escuela nocturna para sus empleados y sus hijos, así como una enfermería y un restaurante. (Matallana, 2015).

Sin embargo, los primeros antecedentes de responsabilidad social empresarial, como tal, se encuentran a comienzos de siglo XX con el surgimiento de la Fundación Social, Fundada en 1911 por el Padre José María Campoamor, sacerdote Jesuita español, cuya misión fue “Contribuir a superar las causas estructurales de la Pobreza para construir una sociedad más justa, solidaria, productiva y en paz”. (Fundación Social, 2010).

Tanto en Colombia, como en el resto del continente, la Iglesia Católica fue la responsable de promover la filantropía en la región, aún desde la Colonia, pero posteriormente se conformaron gremios, como: Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en el año 1944, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en 1945, en el año de 1951 la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI), en 1954 Se crea el subsidio familiar, encaminado a mejorar el bienestar de los trabajadores mediante la creación de cajas de compensación autónomas financiadas con aportes patronales liquidados sobre el valor de la nómina de la

empresa, es así como el 30 de agosto de 1957 se crea la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. (Gutiérrez, 2006, p.20)

3.1.2. Segunda Etapa

Se ubica esta etapa en la segunda mitad del siglo xx, en donde el término de RSE se encuentra en 1987 “cuando algunas empresas muestran en sus informes un "balance social", utilizando una metodología propuesta por la OIT, y la ANDI en el denominado *Manual de Balance Social*, instrumento para medir y evaluar los resultados de la aplicación de la política social de la empresa" (Valenzuela, 2005).

La legislación tributaria estimuló la creación de fundaciones auspiciadas por empresas, al permitir que las donaciones fuesen objeto de deducción de impuestos, surgiendo en este período, entre otras, las siguientes fundaciones sociales: en 1.960 - Fue creada la Fundación Mario Santo Domingo, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Aunque inicialmente su principal área de acción fue Barranquilla y el Departamento del Atlántico, con los años fue expandiendo sus operaciones a Cartagena y Bogotá, y fue sumándose a iniciativas de impacto nacional e internacional. En sus primeros años (1960-70), mediante donaciones, principalmente, promovió programas de educación técnica y tecnológica, inició la primera operación micro financiera en Colombia e inauguró la Universidad del Norte.

En 1.963, la Fundación Corona nació como iniciativa de la familia Echavarría Olózaga, reconocida por impulsar el desarrollo industrial del país mediante la fabricación de productos cerámicos desde la Organización Corona. “La Fundación Corona fue creada por la familia Echavarría Olózaga y es la expresión de su compromiso para con la sociedad colombiana. “La Fundación –llamada en sus orígenes Fundación Santa Elena, en honor a doña Elena Echavarría Olózaga– tuvo entre sus propósitos promover el crecimiento integral de las comunidades

cercanas al área de influencia de las plantas manufactureras de Corona. En ese entonces, la Fundación operaba en forma directa programas asistenciales en educación, vivienda y salud, principalmente”. (Fundación Corona, recuperado el 20 de julio de 2015 de <http://www.fundacioncorona.org.co/>).

Luego, en 1.964 la Fundación FES nace como iniciativa de un grupo de dirigentes del Valle del Cauca interesados en crear una agencia de promoción de esfuerzos a favor de la Educación Superior. Una de sus primeras misiones fue trabajar a favor de la Universidad del Valle en la gestión de recursos nacionales e internacionales para su fortalecimiento.

Posteriormente la FES amplió su campo de acción fijándose como meta el desarrollo social del país, fue así como en 1973 creó el grupo de investigación científica. (Fundación FES, recuperado el 24 de julio de 2015 en <http://www.fundacionfes.org/index.php/quienes-somos/resena-historica>)

En 1977 la familia Carvajal creó la Fundación Carvajal, como un mecanismo para compartir las ganancias de su empresa con toda la comunidad, mediante la promoción del cambio y el desarrollo social y económico en beneficio de las clases menos favorecidas de Cali y el Valle del Cauca, bajo el legado de Manuel Carvajal Sinisterra: “No puede haber empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su desempeño. Por eso, el empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la solución de los problemas sociales”. (Fundación Carvajal, recuperado de <http://www.fundacioncarvajal.org.co> el 26 de junio de 2015)

Finalmente, en 1991 se establece como principio constitucional el Estado Social de Derecho, con la consecuente incorporación del valor de la solidaridad y de la justicia social que debe regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos, y establece responsabilidades

sociales para la empresa y para la propiedad, determinando la prevalencia del interés general o social.

En 1993, catorce organizaciones gremiales se agrupan en el Consejo Gremial Nacional para el fortalecimiento de la función social de los gremios y se firma el "Compromiso de Guaymaral". En este gremio participan gremios de sectores industriales, servicios, agropecuarios, financieros y comerciales.

3.1.3. Tercera Etapa

A partir del siglo XXI, en esta etapa, en el año 2002, por iniciativa de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, el ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización, inició el proceso de creación del documento de normalización de la Responsabilidad Social en Colombia.

Posteriormente, en el año 2004, Se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial (CCRSE), como herramienta de gestión empresarial que permite evaluar el desempeño de la organización en su gestión social, construir su estrategia de negocio y mejorar su competitividad a través de la construcción de una guía de RSE (Correa, 2007, p.98).

De acuerdo a Rojas & Olaya, “Colombia se adhirió al Pacto Mundial en el año 2.004 y para el año 2.008 ya 180 empresa colombiana se había adherido al pacto y más las compañías multinacionales, el número que se registró fue de 450 compañías que integraban la red de responsabilidad social en Colombia.” (Como se citó en Franco, Betancur & Posada, 2014)

Seguido a esto, en el año 2008 Surge la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de Responsabilidad Social, documento elaborado por el Comité Técnico Colombiano 180 de Icontec que proporciona las directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar de

forma continua un enfoque de RS en la gestión y propende por involucrar a las partes interesadas en un desempeño socialmente responsable (Icontec, 2011).

Para el año 2016, 21 gremios hacen parte del Consejo Gremial Nacional, y son: ANDI, Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Asocolflores, Asocaña, Fedepalma, Fedegán, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Andesco, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Camacol, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Asobancaria, Asofiduciarias, Asofondos, Fasecolda, Fenalco y CCI. (www.cgn.org.co, s.f.).

3.2. Responsabilidad social empresarial en la legislación colombiana a partir de los principios del global compact

Para continuar con el estudio, después de presentar el concepto y evolución histórica de la RSE., es importante ubicar la RSE en la Legislación Colombiana, para así comprender e identificar lo que ha sucedido frente al tema, desde sus antecedentes hasta llegar a la actualidad.

Como ya se expuso, la Responsabilidad social Empresarial, surge en Colombia como una política privada social, implantada por algunos empresarios con el fin de reducir un poco los altos índices de pobreza y analfabetismo que en aquellos momentos tenía el país. Se trataba de un trabajo filantrópico a través de la implementación de programas que buscaban el bienestar de los empleados y de las comunidades donde desarrollaban su labor empresarial.

La Constitución Política de 1991 declaró que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual incluye las nociones de solidaridad y de justicia social que deben regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos o particulares; además, estableció responsabilidades sociales para la empresa y la propiedad, determinando la prevalencia del interés general o social frente al particular.

La noción de Estado Social de Derecho implica una revisión al punto liberal del individualismo a través de una afirmación de los derechos sociales, convertidos en derecho positivo y elevado a la categoría de principios constitucionales. Representa el propósito de compaginar dos elementos en un mismo sistema: el modo de producción capitalista y el logro del bienestar social general. (Ramírez, 1996, p. 45)

Por otra parte, el tema de la RSE se encuentra estrechamente ligado al concepto de desarrollo sostenible contenido en la Ley 99 de 1993, cuando señala que: “Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. (Ley 99 de 1993, Diario Oficial de Colombia No. 41146 de diciembre 22 de 1993)

A continuación, se examina en qué medida los principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se hayan comprendidos en el ordenamiento jurídico colombiano, desde el análisis de los principios del Global Compact agrupados en cuatro áreas: derechos humanos, laborales, ambientales y lucha anticorrupción.

3.2.1. En Materia de Derechos Humanos

Los antecedentes de los principios primero y segundo del Global Compact se hallan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, los cuales fueron recogidos en la Constitución colombiana de 1991 y comprenden los llamados *derechos de la primera generación o derechos fundamentales* que

cuentan con protección especial del Estado, por medio de mecanismos preferentes y sumarios, como la acción de tutela y la acción de cumplimiento.

El artículo 93 constitucional establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Le corresponde al Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la Nación con el auxilio del Defensor del Pueblo, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad (Constitución Política, 1991, art. 277-2).

Aparte de lo anterior, Colombia asumió el compromiso unilateral de realizar informes periódicos sobre los avances en el seguimiento a los compromisos voluntarios y recomendaciones aceptadas en el marco del Examen Periódico Universal. Este documento recoge el trabajo de diferentes entidades estatales que trabajan en el tema de derechos humanos y contiene los compromisos voluntarios y las recomendaciones aceptadas en siete capítulos³.

3.2.2. En Materia Laboral

Los principios del Pacto Global en materia de derechos laborales tienen como fundamento los principios y derechos consagrados en los 8 Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales son recogidos en la legislación laboral colombiana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, consagra el trabajo como un derecho fundamental y obligación social.

Respecto al principio III del Global Compact, *"Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva"*, el artículo 55 constitucional establece el deber de garantizar el derecho de negociación colectiva, promover la concertación y

demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, y garantiza el derecho a la libre conformación de sindicatos y a la huelga; establece una comisión permanente integrada por el Gobierno, representantes de empleadores y trabajadores, a fin de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales.

En lo atinente al principio IV del Global Compact, *"Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio"*, Colombia ratificó en 1969 el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Mundial del Trabajo y consagró en la Constitución de 1991, artículo 17, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

En lo que concierne al principio V del Pacto Global, *"Abolir cualquier forma de trabajo infantil"*, la Constitución Política acoge los lineamientos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, consagra la protección del menor contra todo tipo de explotación, entre ellas la explotación laboral, y establece además que los Derechos de los niños prevalecen sobre los demás.

Mediante la Ley 1098 de 2006 se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

Sobresale el trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en materia de la lucha contra el trabajo infantil, el cual conforme al artículo 79 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a través de las Defensorías de Familia, es la autoridad competente encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

En lo relativo al principio VI del Global Compact, "*Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación*", la Constitución colombiana en su artículo 53 establece entre los principios mínimos fundamentales en materia laboral "la igualdad de oportunidades y la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

El Estado garantiza el derecho al reajuste periódico de las pensiones y prevé que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. La Carta Política (artículo 54) establece además como obligación conjunta del Estado y los empleadores, ofrecer capacitación, protección y formación permanente al trabajador y consagra como deber del Estado propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

3.2.3. En materia Medio Ambiental.

Los tres principios medioambientales del Pacto Global se encuentran incluidos en tratados, convenios e instrumentos internacionales, tales como la *Declaración de Estocolmo*, *Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo*, la *Agenda 21*, *Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático*, el *Protocolo de Kyoto*, entre otros, que han sido acogidos por la mayor parte de los Estados e integradas a sus legislaciones convirtiéndose en un Derecho Ambiental Global.

En Colombia, los derechos ambientales son derechos constitucionales de tercera generación y consecuencia de las convenciones internacionales ambientales, tales como la Ley 99 de 1993 del Medio Ambiente, que recoge los principios contenidos en la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo (ONU, 1992) y la Ley 164 de 1994, mediante la cual se aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992.

La Constitución Política, en su artículo 95, establece como deber de la persona y del ciudadano "(...) 8°. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano". Asimismo, el artículo 79 establece que "Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica". Para lograr dichos propósitos la Constitución colombiana prevé que: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (Constitución Política, 1991, art. 80)

3.2.4. En Materia de Lucha Contra la Corrupción

A partir de la Constitución 1991, el entramado institucional para contrarrestar la corrupción en Colombia quedó formado por dos entes de control: la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), y por un ente acusador, la Fiscalía General de la Nación (FGN). Mediante el Decreto 1860 de 1991 se creó la Misión para la Moralización y Eficiencia de la Administración Pública. Posteriormente, mediante el Decreto 2098 de 1994, se creó la Consejería Presidencial para la Administración Pública, y mediante Ley 190 de 1995 fue promulgado el Estatuto Anticorrupción (Gamarra, 2006, p.18).

En 1998 se creó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, basado en la promoción de la prevención con participación ciudadana y fortalecimiento de las acciones de control y sanción mediante la coordinación interinstitucional. En la administración del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se hicieron más severos algunos castigos y se incentivó la participación y veeduría ciudadana en los procesos de administración pública. Mediante la Ley 1474 de 2011 se creó el Estatuto Anticorrupción, orientado a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

4. Marco jurídico – legal de la RSE en Colombia

Con el fin de delimitar un marco jurídico – legal de la RSE, a continuación, se analiza la normatividad jurídica, con el fin de deducir cuales son los campos regulados de la RSE y establecer la legislación que existe en Colombia relacionada con ella.

En la legislación colombiana se han expedido leyes en diferentes materias, relacionadas con la RSE, por lo que a continuación presentamos el desarrollo de dichas regulaciones.

4.1. Regulación en el campo del medio ambiente

Debido a que la naturaleza es considerada como un recurso y el deterioro o mejoramiento del medio ambiente necesariamente tiene consecuencias culturales, económicas y sociales, sobre esta base jurídica- ideológica, encontramos que se ha legislado ampliamente en Colombia.

4.1.1. Constitución Política

La Constitución Política de Colombia ha sido llamada como la Constitución ecológica o verde, debido a que, trae consigo bastantes consagraciones referentes al medio ambiente, siendo el máximo referente jurídico con el que cuenta el tema ambiental, pues en esta se consagran alrededor de cincuenta artículos concernientes a esta materia.

Estos establecen un conjunto de disposiciones para la defensa de la calidad de vida mediante la existencia de un medio ambiente saludable, y señala los deberes ambientales del Estado y los particulares. La carta magna integró la dimensión ambiental a los planes y políticas de desarrollo, lo que proporciona el instrumento teórico más pertinente para hacer del concepto de desarrollo sostenible la base para el desarrollo del país, como una finalidad del Estado y un objetivo social. (Acuña, 2013) La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales:

Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, la Constitución Nacional consagra que: “*Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*”

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.

El medio ambiente como patrimonio común: La Constitución Nacional incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95).

En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: “*la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica*”; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: “*Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables*”. (Constitución Política Colombiana)

El Desarrollo Sostenible: Es Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la Constitución Nacional en desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: “*El Estado*

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ”.

- Artículo 7 Diversidad étnica y cultural de la Nación; hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la Nación y del deber del Estado para con su protección.

- Artículo 8 Riquezas culturales y naturales de la Nación: Establece la obligación del Estado y de las personas para con la conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación.

- Artículo 49 Atención de la salud y saneamiento ambiental: Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación de los mismos.

- Artículo 58 Función ecológica de la propiedad privada: Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

- Artículo 63 Bienes de uso público: Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

-Artículo 79 Ambiente sano: Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un ambiente sano.

-Artículo 80 Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales:

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

- Artículo 88 Acciones populares: Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley.

- Artículo 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país: Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano.

- Artículo 330 Administración de los territorios indígenas: Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales, entre otros. (Constitución Política de Colombia, 1991.)

Los anteriores principios aseguran que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal, que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para gozar de un ambiente sano y de satisfacer sus necesidades de vida.

4.1.2. Ordenamiento Jurídico

En el ordenamiento jurídico de Colombia se encuentra un número significativo de Decretos y Leyes para la protección del Medio Ambiente, de las cuales se destacan algunas reglamentaciones fundamentales que han orientado el tema ambiental en Colombia, a saber:

La Ley 23 de 1973:

La cual sirve como inicio de los antecedentes normativos de carácter ambiental, por medio de esta, se trazaron los parámetros de la política ambiental en Colombia.

El Decreto ley 2811 de 1.974:

Promulga el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables RNR y no Renovables y de protección al medio ambiente. Bajo el principio de que el ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Este decreto, se constituyó en la primera compilación de carácter ambiental en América Latina. La expedición de este histórico Decreto-Ley se dio en el marco de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la ley 23 de 1973, norma que recogió los principios establecidos en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972. Es así como la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales, marcó la pauta para la creación de la legislación ambiental colombiana y se sustrajo de la legislación civil la regulación de los recursos naturales, normas que tradicionalmente regularon su uso y aprovechamiento. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).

Uno de los puntos más importantes que toca esta norma, lo encontramos entre sus artículos 134 y 147, en los que se aborda la prevención y control de la Contaminación del agua. Enmarcando las obligaciones del estado como garante de la calidad del agua para el consumo humano.

La Ley Sanitaria Nacional (Ley 9 de 1979)

Establece los fundamentos del derecho sanitario en Colombia, además de particularidades en cuanto al saneamiento y la protección ambiental no abordados en el Código de Recursos Naturales. Esta ley comprende un régimen legal en las áreas de saneamiento ambiental, observación y vigilancia a personas, e inspección sanitaria.

Esta ley regula las disposiciones legales referentes a la conservación del medio ambiente y los parámetros que preservan, conservan y mejoran las condiciones higiénicas de los

trabajadores en sus puestos laborales; por lo tanto, se alude a la generación e impulso de normas que permitan hacer valer los derechos y deberes del ciudadano, lo cual compromete no solo al estado sino a toda persona. Esta normatividad es regulada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Entre sus ejes temáticos se encuentra reglamentación sobre el uso del agua, el manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo de disposiciones excretas y emisiones atmosféricas que pueden afectar el medio ambiente y ocasionar perjuicios en la salud de la comunidad. Se establecen también normas específicas en el manejo de alimentos en cuanto a equipos y utensilios, operaciones, empaques, rotulados, uso de aditivos, de igual forma alimentos de la canasta familiar como huevos, cárnicos, lácteos, pescados, frutas, hortalizas y su conservación y especificaciones de los mataderos entre otros.

La Ley 99 de 1993:

Esta norma dio vida al Ministerio del Medio Ambiente y le confirió dos propósitos fundamentales: impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza, y asegurar el desarrollo sostenible (Rodríguez, 1998).

Dicha ley incorpora en su artículo tercero el concepto de desarrollo sostenible, definido así: [El desarrollo] que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. (Ley 99 de 1993, art. 3)

De igual manera, organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están

relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias:

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria

Ley 491 de 1999:

Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal.

El Código Penal (Ley 599 de 2000):

El cual reglamenta bajo un mismo título los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Extiende respecto al Decreto 100 de 1980 los tipos penales relacionados con los impactos ambientales causados con base en actividades ilegales.

El Código de Minas (Ley 685 de 2001):

Regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, respecto a la explotación minera, para que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y del ambiente se realice a partir de un concepto integral de desarrollo sostenible.

La Ley 1382 de 2010:

Modifica la Ley 685 al excluir de cualquier actividad minera los Parques Naturales Nacionales y Regionales, las zonas de reserva forestal protectora, los páramos y los humedales de importancia internacional pertenecientes a la Convención Ramsar.

Además, ésta ley adiciona en su Artículo 27 el concepto de responsabilidad social empresarial de la siguiente forma: Responsabilidad social empresarial. Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su influencia. (Ley 1382 de 2010, art. 27)

4.1.3. Legislación internacional adoptada por Colombia

En Colombia, el ordenamiento jurídico en lo que tiene que ver con el medio ambiente, se ha desarrollado como consecuencia de las políticas propuestas por la comunidad internacional, adoptadas mediante convenios, entre ellos se resalan los siguientes:

- Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958
- Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76 (1976)
- Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural . París, 1972
- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973.
- Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su protocolo "El Fondo 71/76" (1976)

- Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Lima, 1981.
- Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982
- Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la Región del Gran Caribe. Cartagena, 1983
- Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989
- Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992
- Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992
- Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997)

4.2. Regulación en el campo de las relaciones laborales

El marco jurídico que contiene rasgos similares a la responsabilidad social en materia laboral en Colombia es bastante amplio. El Derecho Laboral en Colombia está regulado por la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo.

4.2.1. Constitución Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia de 1991, regula el Derecho Laboral, a través de los siguientes principios fundamentales:

- Libertad de Trabajo C.P. 17, 26 y 84.

Este principio se refiere a la posibilidad de los trabajadores de desempeñarse en la actividad laboral que a su libre albedrío escoja desempeñar. Conforme a la doctrina, el principio

de libertad muchas veces se encuentra limitado a la realidad social de cada nación, es decir si no existe la demanda laboral para cada profesión el trabajador por más capacitado que se encuentre deberá acudir a realizar otras actividades para garantizar su mínimo vital.

- Obligatoriedad del Trabajo C.P. 25

Este principio encuentra su pilar en la necesidad de colaboración que debe existir entre los miembros de una sociedad para llegar a un desarrollo competitivo internacional y a su vez, mantener un equilibrio social acorde con las necesidades de los ciudadanos, este objetivo implica que cada uno de los individuos aporte su fuerza laboral, convirtiéndose esto en una obligación social adquirida por el individuo en pro de la comunidad. Al respecto de este principio no encontramos un ejemplo concreto, en consideración a que es un mandato de optimización y un principio programático que persigue fines e ideales propios de un Estado Social de Derecho.

- Protección del Estado C.P. 25, 53, 54, 86, 215, 334, 336.

Se define este principio como la garantía ofrecida por parte del Estado a fin de salvaguardar el desarrollo del trabajo, en el marco del establecimiento de determinadas garantías, dentro de las cuales encontramos la organización institucional creada a fin de *“prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos”*.

- Igualdad en Materia Laboral Artículos 13, 25, 43 y 54.

En desarrollo de este principio debemos empezar por recordar que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Ahora bien, en el ámbito laboral, se establece que todos los trabajadores deben ser tratados con las mismas normas y garantías, sin que exista la posibilidad de preferencias o beneficios de unos frente a otros, por razón de su carácter intelectual o su labor, es decir, que la normatividad que regula la materia se debe aplicar íntegramente a los trabajadores sin considerar aspectos subjetivos sino solamente la condición de trabajar.

A partir de 1991, con la expedición de la nueva Constitución Política de Colombia, hubo un avance significativo en todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya que como norma constitucional, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados por el Congreso de la República, forman parte de la legislación interna, lo que determinó que todos los convenios ratificados por Colombia sean, por tanto, de aplicación inmediata.

El artículo 53 de la Constitución Política, parágrafo 4, dispone que “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”.

El artículo 93 de la Constitución Política dispone que “Los tratados y convenios internacionales, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. El artículo 38 de la Constitución Nacional dispone: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”

4.2.2. Ordenamiento Jurídico:

Las normas más destacables, que básicamente regulan las relaciones laborales y en donde encontramos varios aspectos que cubren los requerimientos de la RSE son los siguientes:

- El Código Sustantivo del Trabajo:

Comprende los decretos 2663 y 3743 de 1950, Los cuales fueron adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente, la cual es actualizada de acuerdo con los cambios que se presentan.

En primera medida, se definió el concepto de contrato individual de trabajo, y se determinó sus elementos esenciales, se delimitan sus modalidades forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba del mismo. Se determinó por primera vez cuales son los elementos que constituyen salario y cuales pagos no hacen parte de este.

Una de las más importantes innovaciones que introdujo el decreto es la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo (artículo 24 decreto 2663 de 1950), lo que significó para los trabajadores un alivio ante la incertidumbre que originaba la inexistencia de un contrato laboral firmado entre ellos y sus empleadores, otorgándoles una presunción legal con las que podían exigir sus derechos.

De igual manera se estableció que son ineficaces las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo.

Se determinaron las obligaciones tanto de los empleados como de los empleadores en la ejecución del contrato laboral encontrándose entre estas, la obligación de los empleadores de procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.

Se realizaron prohibiciones explícitas a los empleadores, siendo resaltable la prohibición respecto de las retenciones de salarios sin autorización expresa del trabajador u orden judicial, lo que es al día de hoy una de las mayores garantías que tienen los empleados para resguardar su salario de descuentos arbitrarios.

Se determinó las causales para la terminación del contrato por justa causa y se señaló la sanción para el no pago de las prestaciones al momento de la terminación del contrato.

- **La Ley 21 de 1982:**

Reglamentada por el Decreto 341 de 1988. Modifica el régimen de subsidio familiar. La importancia de esta ley y sus decretos reglamentarios radica en que fue la que definió verdaderamente la figura de Subsidio Familiar, en voces de Vanegas (2007) *“El sistema de subsidio familiar es el conjunto de normas, programas e instituciones que desarrollan el subsidio familiar”* y de conformidad con la Ley 21 de 1982 *“el subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, cuyo objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.”*

Entre las asignaciones que se derivan de esta prestación figura el subsidio familiar por hijos a cargo, subsidios a la permanencia de la madre en el hogar, subsidios alimentarios, programas sociales para la familia, etc. Este subsidio familiar puede asumir tres modalidades: en dinero, en especie y en servicios.

Este sistema, nace como respuesta a los bajos salarios que han tenido los colombianos a través de la historia, pero lo que encontramos como antecedente curioso del subsidio familiar en nuestro país, es que surge como una iniciativa de la empresa privada, “no del Estado”, que según Cortés (2006) habiendo sido pactado mediante convención colectiva por el Ferrocarril de Antioquia el 22 de febrero de 1949, y posteriormente se impulsó su estructuración por parte de las empresas afiliadas a la ANDI en 1954, reconociéndole a esta asociación el liderazgo para dar origen institucional a las cajas.

En ese orden de ideas, es dable manifestar que la empresa privada creó el subsidio familiar como una forma de hacer ver a la clase trabajadora su preocupación por incrementar sus ingresos, pero el trasfondo de esta situación fue la de generar un aumento en ese ingreso, pero

que esta suma no hiciera parte de la liquidación de las prestaciones sociales al finalizar un vínculo laboral.

- **La Ley 50 de 1990**

Más conocida como reforma laboral, y el Código Sustantivo del Trabajo, hace modificaciones a este articulado, el cual contempla temas como la contratación individual de trabajo, salarios, jornadas de trabajo, descansos obligatorios, prestaciones patronales, derecho colectivo del trabajo.

- **La Ley 100 de 1993**

Junto con sus decretos reglamentarios, rige el Sistema General de Pensiones, aunque por efecto del régimen de transición y los regímenes exceptuados, algunas de las normas precedentes están vigentes.

- **La Ley 549 de 1999**

Rige el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales —FONPET—

4.3. Regulación en el campo comercial

El Derecho Comercial es una de las subdivisiones del Derecho Privado, el cual estudia en toda su extensión las relaciones jurídicas patrimoniales de las personas entre sí y las regula a través del Código de Comercio, que al igual que toda la normatividad encuentra su fundamento en la Constitución Política de Colombia,

El precepto contenido en el artículo 25 del Código del Código de Comercio colombiano define a la empresa como “... toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios...”,

El Código de Comercio Colombiano, debe ser interpretado a la luz de nuestra Constitución Política, que en sus artículos 4 y 333, respectivamente, declara a Colombia como un Estado Social de Derecho, y le impone a la empresa, como base del desarrollo, una función social que implica obligaciones.

Con la Constitución de 1991, se elevaron a rango constitucional los derechos de los consumidores, El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, señala: *“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos”*

El concepto de RSE, no es nuevo para el derecho comercial, sobre todo porque la concepción del derecho empresarial abarca áreas como el derecho laboral, tributario y el derecho societario, de lo que se trata, es de establecer la existencia de un modelo normativo que sustente la aplicación de la RSE.

La Ley 222 de 1995 es la encargada de definir a favor de quién se debe administrar una sociedad comercial. A ese respecto, la norma contenida en el artículo 23 establece de forma clara que las actuaciones de los administradores deberán realizarse en interés de la sociedad para la cual ejercen su cargo, considerando el interés de sus socios ³⁵. Es decir, el interés social conforme con esta ley debe tener como principal referente el interés de los socios, planteamiento que, dicho sea de paso, resulta coherente con la legitimación que el artículo 25 de la misma ley

entrega a los accionistas constituidos en asamblea, para decidir si se ejerce la acción social de responsabilidad a favor de la sociedad.

La norma antes mencionada, que parece adoptar el modelo de la primacía de los accionistas, es posterior a la Constitución y en ese sentido, se puede entender que existe una contradicción, por lo que encontramos varios pronunciamientos tanto vía tutela como de fallos de constitucionalidad, en donde la Corte Constitucional ha intentado dar un alcance a la cláusula de función social de la empresa, incluso si no lo ha hecho con fundamento o en relación con el alcance del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, ha considerado que la función social tiene un carácter complementario al ánimo de lucro propio de los entes empresariales, que por supuesto benefician a sus aportantes de capital.

Decreto 3466 de 1982. Fue el primer Estatuto del Consumidor en Colombia, en donde se concretiza la forma en que se protege al consumidor mediante una serie de herramientas conforme a las cuales puede hacer valer sus derechos. A pesar de que era de esperarse que, al contar con una nueva Constitución que incluía los derechos de los consumidores, devendría una modificación en la norma que regulaba los derechos de los consumidores, esto no sucedió, ya que nuestro país mantuvo por casi treinta años un régimen legal de garantías básico, manteniéndose vigente esta regulación hasta el año 2012.

La Ley 1480 de 2011, por la cual se expide el Nuevo Estatuto del Consumidor, Empezó a regir desde el 12 de abril de 2012, y se ha convertido en la principal "arma" de miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios. Desde entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de velar por los derechos de los consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos, derechos, novedades e impacto que tiene

este Estatuto, sino que, además, ha puesto a disposición de la población todos los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer efectiva dicha Ley (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014). Dentro de sus principios generales, esta Ley - que beneficia a todos los colombianos - decreta:

La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. El acceso de los consumidores a una información adecuada - de acuerdo con los términos de esta Ley que les permita hacer elecciones bien fundadas.

- La educación del consumidor.
- La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
- La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia.

De igual forma, el Estatuto del Consumidor estableció que existen acciones de tipo jurisdiccional para proteger al consumidor. Así, además de referirse a las acciones populares y de grupo reguladas en la Ley 472 de 1998, introdujo la acción de responsabilidad por daños ocasionados por productos defectuosos y la acción de protección al consumidor.

Mediante la acción de protección al consumidor se deciden los asuntos contenciosos de interés particular, que tienen como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; y los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía al que pertenezcan.

Por otra parte, tratándose del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control bajo el espectro de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus Delegaturas de Protección al Consumidor, de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y de Protección de Datos Personales, busca que los derechos de los consumidores a la información veraz, a la protección contra la publicidad engañosa, a la seguridad de los productos y a la intimidad, estén siempre salvaguardados frente a algunas prácticas en las que pueden incurrir los agentes del mercado. (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2017)

En este mismo sentido, el Estatuto del Consumidor, crea la Red Nacional de Protección al Consumidor - RNPC, cuya secretaría técnica está en cabeza de esta Superintendencia

4.4. Regulación en el campo de la inversión social

El campo de la Inversión Social comprende cuatro subespecies a saber: Educación, Vivienda, Cultura y Salud. Existe una gran cantidad de disposiciones legales en donde es el Estado el sujeto activo de la inversión social, regulado a partir de la Constitución Política de Colombia.

4.4.1. Educación

En la Constitución Política de Colombia, encontramos los siguientes principios:

El Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, establece: *“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,*

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”

En sentencia T-743/13, la Corte Constitucional indicó: “...El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. En su dimensión de

derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política...”

En el área de la educación se encuentran normas que materialmente coinciden con el desarrollo de la RSE, como el Decreto 118 de 1957, por medio del cual el Estado creó el Servicio Nacional General de Aprendizaje (SENA), el que tiene por objeto cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos.

El Decreto 917 de mayo 22 de 2001, establece los estándares de calidad en programas académicos de Pregrado en ciencias de la salud.

En el Ordenamiento Jurídico Colombiano, encontramos amplia normatividad en el área de la educación que materialmente coinciden con el desarrollo de la RSE.

4.4.2. Vivienda

El derecho a la vivienda digna está reconocido por el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia. Es un derecho de carácter asistencial que requiere de un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin.

Artículo 51: *“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda...”*

En el ordenamiento jurídico, encontramos normas en el área de vivienda, son propósitos del Estado Colombiano, para alcanzar metas en el campo social, las que necesariamente involucran al sector privado, que en la práctica es el encargado de financiar la adquisición y/o la construcción de las viviendas, especialmente las viviendas de interés social.

La ley 812 de 2003, adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, contiene en su artículo octavo numeral séptimo literal B., el ambicioso proyecto de crear 400.000 nuevas unidades de vivienda de interés social.

4.4.3. Cultura:

- Constitución Política.

Las normas jurídicas en el campo de la cultura tienen su fundamento Constitucional, en los artículos 70 y 71 de la Constitución Política.

Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación...”

Artículo 71 de la Constitución Política de 1.991 preceptúa que el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales.

El Estado ha implementado esta disposición constitucional a través del sector privado por medio de la creación de incentivos a quienes participen en su desarrollo.

La más destacable de las normas que contienen estos incentivos es la Ley 397 de 1.997, por medio de la cual se crean incentivos para fomentar la cultura mediante la facilitación en el otorgamiento de créditos y la creación de exenciones en impuestos para algunas actividades culturales.

4.4.4. Salud

Las normas jurídicas en el campo de la Salud, tiene su fundamento Constitucional, en el artículo 49 de la Constitución Política, que señala:

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.”

El Acto Legislativo 2 de 2.009, "Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución". Es la reforma constitucional que penaliza el consumo o la dosis mínima de estupefacientes y

establece acciones preventivas y de rehabilitación para los drogadictos. Decidió que *"la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud"*.

Por medio de la Ley Estatutaria No 1751 de fecha 16 de febrero de 2.015, se regula en Colombia el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, con el objeto de garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.

Por otra parte, el marco jurídico de la RSE en el campo de la salud se encuentra dividido en dos campos: por un lado, se encuentran el sistema general de salud mediante el cual se le brinda la atención en salud a los trabajadores y sectores más necesitados de la sociedad y por el otro lado esta los estándares de calidad sobre productos o servicios que requieren de especial atención ya que puedan llegar a poner en peligro la salud o la vida de las personas.

Entre las normas que contienen los estándares de calidad en la producción o prestación de un servicio que pueda llegar a afectar la salubridad pública, encontramos las siguientes:

- **Ley 30 de 1986**

Esta Ley determina las competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) como responsable de la Política Nacional de Drogas, la conformación de un “Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional de la Farmacodependencia” y de los Consejos Seccionales de Estupefacientes; incorpora algunas definiciones como: droga, estupefaciente, medicamento, psicotrópico, abuso, dependencia psicológica, adicción o drogadicción, toxicomanía, dosis terapéutica, dosis para uso personal, precursor, prevención, tratamiento, rehabilitación, plantación, cultivo. Establece las campañas de prevención y programas educativos así como

campañas de prevención contra el consumo del alcohol y del tabaco; determina el control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen dependencia; aborda los delitos y contravenciones.

Mediante la Ley 30, se asigna al Ministerio de Salud Pública, reglamentar y controlar la elaboración, producción, transformación, adquisición, distribución, venta, consumo y uso de drogas y medicamentos que causen dependencia y sus precursores.

- **La ley 9 de 1979**

Reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población.

Sin duda alguna la salud de los habitantes de una población determina su calidad de vida, y esta ley dictamina las reglas más importantes para el funcionamiento de diversas entidades, producto o situaciones que influyen en las condiciones de vida de la comunidad.

También llamada “Código Sanitario” en donde se exponen las normas para adoptar las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana y animal.

- **Ley 100 de 1993**

En la que se soporta el Sistema General de Salud, en donde se brinda el servicio de salud a los trabajadores y al otro sector denominado régimen subsidiado que corresponde a las personas de escasos recursos.

Esta ley dispone que tanto los empleadores como los empleados deben realizar unos aportes obligatorios que sirven para financiar el Sistema General de Salud que se financia también con aportes del presupuesto del Estado.

De esta forma se brinda seguridad a los trabajadores y mediante el régimen subsidiado en donde se trasladan recursos de superávit y aportes solidarios a este régimen para que las personas de escasos recursos pertenecientes al SISBEN puedan llegar a acceder al Sistema de Salud.

5. La responsabilidad social empresarial en el ámbito internacional

La preocupación por las dificultades sociales de la población en numerosos países, llevó como respuesta a que surgieran diferentes instrumentos internacionales que establecen directrices para promover un tratamiento adecuado a la RSE en los diferentes países del mundo, encontrándose entre los más importantes los siguientes:

a) *Global Compact* o Pacto Global (ONU, 1999). Considerada actualmente como la iniciativa más importante del mundo en el campo de la RSE. Este instrumento busca que tanto las empresas como las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que lo acogen voluntariamente, se comprometan a adoptar en la ejecución de sus funciones y actividades los diez principios que rigen el Pacto, garantizándose condiciones adecuadas para la población en materia de derechos humanos, derechos laborales, mecanismos anticorrupción y medioambiente.

b) Declaración del Milenio (ONU, 2000), que destaca la importancia de trabajar con empresas responsables para lograr la reducción de la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, entre otros (Carrillo y Toca, 2014).

c) Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (ocde, 2013). Establecen recomendaciones de los gobiernos dirigidas a empresas multinacionales para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global; buscan guiar los comportamientos de las empresas para que a través de ellas se protejan y desarrollen las comunidades en lo que respecta a los derechos humanos, asuntos laborales, medioambientales, medidas anticorrupción, ciencia y tecnología.

d) Declaración tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social (OIT, 1977 y 2000): dirigida a empresas y gobiernos, quienes pueden acogerse voluntariamente a esta. Fomenta el respeto de la soberanía estatal y el apego a las normas, usos y políticas nacionales en

el desarrollo de sus operaciones, y promueve la ratificación y aplicación de las recomendaciones y convenios de la OIT.

e) Norma ISO 26000 *Guía sobre responsabilidad social*: sirve a las empresas para alcanzar el desarrollo sostenible, comportándose de modo socialmente responsable. Este instrumento se centra en el fomento de garantías a los derechos humanos, laborales y medioambientales, así como en temas relativos a prácticas justas de mercado, respeto y protección del consumidor, en aras de alcanzar el progreso social (Acevedo et al., 2013).

Adicional a la emisión de los anteriores instrumentos internacionales las empresas del mundo entero han empezado a adoptar programas de RSE, que en la mayoría de los casos depende del ordenamiento jurídico de cada uno de los países en los cuales operan las empresas, así como de la situación cultural, social, laboral y ambiental propia de cada país.

A continuación, se expone un resumen del panorama jurídico que presenta la figura de la RSE en algunos países:

5.1. Estados Unidos de Norteamérica⁵

Dentro de los aspectos más importantes que motivan la actividad social de las empresas en Estados Unidos está la gobernabilidad y transparencia de las instituciones. Gobierno y accionistas son los principales promotores de la transparencia y buen gobierno entre las empresas. De igual forma, la lucha contra la corrupción y falta de transparencia en la gestión de las filiales en otros países ha estado siempre en el punto de mira de los empresarios.

En este sentido, se ha producido un tímido desarrollo del marco regulatorio, debido, principalmente, a los escándalos corporativos de los últimos años. Fruto de ello es la ley

⁵ Características de la responsabilidad social en las empresas de Estados Unidos. www.compromisoempresarial.com

Sarbanes-Oxley por la que se establecen controles más exhaustivos y auditorías a las empresas cotizadas en bolsa.

La ley no sólo está dirigida a mejorar la gobernabilidad corporativa y la transparencia, sino que, además, sugiere la inclusión de los temas ambientales y sociales en las memorias anuales, lo cual ha contribuido a un mayor nivel de documentación de estas actividades, hasta ahora casi inexistente en la mayoría de los casos.

Aunque se han producido estos avances, la realidad es que no ha habido un incremento sustancial en el número de empresas que documentan sus acciones de responsabilidad corporativa, y la ausencia de registro y documentación de estas acciones en informes separados y especializados continúan siendo características en Estados Unidos.

En un porcentaje muy alto, la acción social de la empresa estadounidense se realiza a través de terceras partes, o lo que es lo mismo delegando la ejecución en organizaciones civiles locales, entes públicos, otras entidades de desarrollo internacional, y en los últimos años, mediante la creación de fundaciones empresariales.

Esta actuación delegada responde a unos objetivos más coyunturales, sobre temas puntuales y concretos que pueden afectar a la empresa en ese momento, frente a una acción más directa en el día a día de la sociedad beneficiaria, mediante la creación de una capacidad productiva, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, así como el desarrollo local de los grupos de interés, con un objetivo de sostenibilidad en las acciones.

Una mayoría amplia de las empresas estadounidenses confirma en sus informes actividades filantrópicas motivadas por beneficios fiscales obtenidos de contribuciones a organizaciones sociales o por la creación de fundaciones empresariales. Estos programas sin una adecuada evaluación de impacto, tienen una menor repercusión sobre el grupo de beneficiarios,

que la que tendrían otras formas de inversión social, en términos de valor añadido social y de negocio. (Pernal, 2005)

Existe en Estados Unidos una ausencia generalizada de una certificación o auditoria de sus programas sociales o medioambientales. La ausencia de un requerimiento especial de control externo sobre aquellos indicadores que no corresponden a la gestión financiera y económica de la empresa, hace que éstas, salvo presión de los accionistas, no tengan ningún incentivo para realizar dichos controles.

Se aprecia que existe una gran flexibilidad de las leyes estatales en muchos aspectos que hacen parte de la RSE, tal es el caso de las relaciones laborales, donde podemos señalar la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA-siglas en inglés) la cual establece normas para el salario mínimo, pago de sobretiempo, mantenimiento de datos y empleo de menores de edad que afectan a trabajadores de tiempo completo y de tiempo parcial en el sector privado y en el gobierno federal, al igual que en los gobiernos estatales y locales.

Aunque la ley FLSA establece normas básicas sobre el salario mínimo, el pago de sobretiempo y regula el empleo de menores, existen ciertas prácticas de empleo que la Ley no regula.

Por ejemplo: la ley FLSA no obliga a:

1. Pago por vacaciones, por días feriados, por terminación de empleo ni por enfermedad;
2. Períodos para comer o descansar, días feriados o vacaciones;
3. Pago adicional por trabajar fines de semana o en días feriados;
4. Aumento de sueldo o beneficios suplementarios; ni
5. Aviso de despido, razón por el despido, ni el pago inmediato del último sueldo de los empleados despedidos.

La ley FLSA no exige el pago de salario ni provee medios para recobrar los sueldos normales o prometidos al empleado o comisiones que sean en exceso de los que la Ley requiere. Sin embargo, algunos estados tienen leyes bajo las cuales se pueden hacer reclamaciones de ese tipo y en algunas ocasiones, de los beneficios suplementarios.

Además, la ley FLSA tampoco limita el número de horas que se puede exigir que el empleado trabaje al día o el número de días en una semana, incluyendo las horas de sobretiempo, si el empleado tiene por lo menos 16 años de edad.

Los asuntos anteriormente mencionados quedan para acuerdos entre los empresarios y los empleados o sus representantes autorizados. (Departamento del Trabajo de Estados Unidos, 2014)

5.2. Normatividad de la RSE en Europa

La comunidad europea ha legislado ampliamente sobre la RSE, entre lo más destacable de esta legislación y conceptos vinculantes tenemos:

- Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental. Bruselas, 9 de febrero de 2000.
- Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Publicado por la Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 18 de julio de 2001.
- Comunicación de la Comisión relativa a la Responsabilidad Social Empresarial: una contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas, 2 de Julio de 2002.
- Nueve recomendaciones del Foro Europeo Multistakeholder para la RSC.
- Resolución del Consejo relativa a la Responsabilidad Social Empresarial, 6 de febrero de 2003.
- Informe del foro Europeo de Grupos Interesados, 30 de junio de 2006.

- Nueva Comunicación de la Comisión sobre Responsabilidad Social Empresarial, 22 de marzo de 2006.
- Informe de la Reunión de Grupo de Alto Nivel RSE. Bruselas, 31 de marzo de 2008.

En el Reino Unido, desde 1980 fueron creados sistemas que tenían como criterio de inversión el desempeño ético y social de las compañías y posteriormente se han establecido exigencias para las empresas desde el ámbito normativo, con las que se les imponen deberes de creación de estrategias de inversión social y cuentan con organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales que centran su funcionamiento en el tema de la RSE.

5.3. Normatividad de la RSE en la India

India emitió el 30 de agosto de 2013 la Ley de las Empresas, en cuyo artículo 135 establece que las compañías que superen determinado tope de ingresos tienen la obligación de destinar un porcentaje de sus ganancias a adelantar acciones socialmente responsables, dentro de campos específicos definidos por el legislador.

La nueva normativa legal -que reemplaza a la Ley de Sociedades de 1956- convierte a la India en el primer país del mundo en establecer niveles de inversión social empresarial de manera obligatoria, determinando que todas las empresas con una capitalización bursátil de más de U\$S 82 millones o beneficios netos anuales de U\$S 9 millones tienen que destinar al menos el 2% de sus ganancias en actividades de RSE. (Kordant Philanthropy Advisors, 2013)

Para esto, se eligieron "categorías" de inversión, todas tendientes a garantizar un crecimiento equitativo y sostenible. Los rubros elegibles son aquellos en que más carencias se observan en la India, coincidentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

- Promoción de la educación

- Erradicación de la extrema pobreza y del hambre
- Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
- Combate al SIDA, malaria y otras enfermedades
- Sostenibilidad ambiental
- Reducción de la mortalidad infantil y mejoramiento de la salud materna
- Derechos Humanos
- Crecimiento inclusivo

La legislación también promueve otras dimensiones de RSE como la igualdad de género en la Alta Dirección, establece que al menos un tercio de directores de la empresa deben ser independientes y por primera vez permite la posibilidad de demandas colectivas contra empresas de la India, en materia de derechos humanos y abusos laborales.

Así mismo, se estableció la creación de un Comité de RSE al interior de cada empresa para asesorar a la junta directiva en los temas relativos a la materia y hacer un seguimiento a las sumas de dinero que se destinen a ello. Sus actividades deberán reportarse anualmente, detallando aquellas relativas a RSE que hayan sido adelantadas por la compañía, so pena de que esta o sus directivos sean sancionados con altas multas.

Las empresas serán auditadas cada año para constatar si están cumpliendo con la ley, y aunque de momento no existe una sanción legal si no están invirtiendo el 2%, sí deben dar una explicación formal y convincente al Gobierno, que puede terminar obligándolas. En cuanto a los auditores, serán cambiados en un máximo de cinco años de empresa. Cada uno auditará a un tope de 20 y solo podrán cumplir esta labor durante 10 años. Esta medida fue pensada para evitar actos de corrupción, que sí están penados. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014)

5.4. Normatividad de la RSE en Indonesia

En Indonesia donde la RSE ha sido un tema al que el Gobierno de ese país ha prestado atención desde 1989, cuando se establecieron programas de apoyo a la comunidad por parte de las empresas de propiedad del Estado.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 40/2007, se establece la obligatoriedad de adelantar acciones de RSE para empresas que se dediquen a explotar recursos naturales. Dispone la fijación de parámetros para los programas de RSE principios rectores, así como incentivos y sanciones, por medio de regulación complementaria. (Fajardo, 2015)

5.5. Desarrollos legales de la RSE en España

De acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España (2015), algunas compañías españolas han sido proactivas en la adopción de la RSE, así como de sus estándares y principios internacionales. Muestra de ello es el elevado número de empresas que han suscrito los principios del Pacto Mundial apoyado por Naciones Unidas con respecto a otros países.

Es destacable también la evolución positiva que ha tenido entre las empresas de España el informar sobre los estándares internacionales de transparencia y reporte.

En este ámbito cabe resaltar que, en 2002, siete organizaciones españolas hicieron uso del marco de Global Reporting Initiative⁶ (GRI) para la elaboración de informes anuales RSE. Una cifra que en 2012 había ascendido a 180. Asimismo, resulta relevante el hecho de que España sea el país con el máximo nivel de aplicación de las guías GRI.

⁶ La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

A lo largo de la última década se han desarrollado en España distintas iniciativas públicas destinadas a promover la responsabilidad social de las empresas, tanto desde el ámbito de la Administración General del Estado, como desde el autonómico.

La primera iniciativa pública data del 27 de diciembre de 2002 cuando el Pleno del Congreso de los Diputados acordó que, en el seno de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se creara una Comisión Técnica de Expertos con la finalidad de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa.

Los trabajos de la subcomisión parlamentaria en el año 2005 para el estudio de la responsabilidad social empresarial en España supusieron un primer esfuerzo recopilatorio de las iniciativas y nuevas tendencias vinculadas a la asunción de los principios de responsabilidad social por parte de las empresas, así como de las propuestas para potenciarla y promoverla¹³.

Ese mismo año se constituye un Foro de Expertos sobre RSE¹⁴, con el objetivo de servir de apoyo al diseño de políticas de impulso en este ámbito.

Dos años más tarde, tiene lugar la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social¹⁵ orientada, entre otras cosas, a elaborar propuestas para estimular y difundir las buenas prácticas en materia de RSE; impulsar las políticas de RSE en la Administración Pública; y definir el papel y el compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales en este ámbito.

Tres años más tarde, teniendo en cuenta las recomendaciones del Parlamento, del Foro de Expertos de RSE y de la Mesa de Diálogo Social, fue constituido, a través del Real Decreto 221/2008 de 15 de febrero, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE)¹⁶, un órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pionero en el conjunto de los países de nuestro entorno. Dentro de su amplia funcionalidad,

analiza el desarrollo de la responsabilidad social en España, en la Unión Europea y en otros países e informa sobre las actuaciones en esta materia.

Entre los desarrollos legislativos que abordan la responsabilidad social de las empresas de forma explícita, destaca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla en su Título VII la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las empresas en materia de igualdad, incluyendo el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, utilizando el criterio prevalente del talento y del rendimiento profesional; así como la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que introduce orientaciones para crear condiciones más favorables para un desarrollo económico sostenible, e incluye tres referencias de impulso a la responsabilidad social empresarial. Por un lado, el artículo 27, sobre principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo en relación con las remuneraciones de los directivos; el artículo 3518, sobre la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas; y, por último, el artículo 39 sobre la promoción de la responsabilidad social de las empresas. También se incluyen referencias a la responsabilidad de los Organismos Reguladores y a la inversión Socialmente Responsable y otros artículos que comprenden actuaciones de responsabilidad social: planes de movilidad sostenibles, consumidores, etcétera. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 2015)

La disposición final trigésima de esta Ley de Economía Sostenible, establece también que reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para la difusión de la información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de pensiones. A través de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, se dará respuesta y cobertura a las previsiones que la Ley de Economía Sostenible

establece, facilitando los medios para, entre otras actuaciones, dar publicidad de las políticas de responsabilidad social de las entidades públicas y privadas.

Por otro lado, en febrero de 2013 se aprobó el Real Decreto Ley 4/2013, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, convertido posteriormente en la Ley 11/2013 de 26 de julio.

La Ley 11/2013 de 26 de julio incluye las principales medidas que forman parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Un documento que es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales -que recoge además las aportaciones de organizaciones de autónomos, jóvenes, empresarios, entidades de la economía social y otros grupos de interés-, al que pueden adherirse todas las entidades públicas y privadas que pongan en marcha actuaciones que faciliten el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

Por otro lado, merece mención especial otros desarrollos legislativos recientes como la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que contribuirá a restaurar la confianza en las Instituciones con un triple alcance: de un lado, incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas; de otro, reconoce y garantiza el acceso a la información; y por último, establece las recomendaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, fue aprobada el 16 de julio de 2014 por el pleno del CERSE y el 24 de octubre por el Consejo de Ministros.

Se trata de un documento que pretende constituirse como un marco de referencia en todo el territorio español en materia de responsabilidad social y que incluye 60 medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de prácticas responsables en las organizaciones públicas y privadas con

el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

La Estrategia, va dirigida a la promoción de la responsabilidad social al mayor número de organizaciones, de forma que todas ellas incorporen las iniciativas en esta materia en su propia cultura y valores, y debe servir además como instrumento eficaz para el cumplimiento de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado en esta materia.

Por ello, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas no se limita sólo a la empresa, sino que pretende favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas y privadas con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación del país hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 2015)

5.6. Normatividad de la RSE en Perú

El Pleno jurisdiccional⁷ 0048-2004-PI-TC precisa;”...La responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible”

El Tribunal Constitucional en el expediente 008-2003-AI-TC señaló que “la economía social de mercado debe ser ejercida con responsabilidad social empresarial”

El TC entiende el término social como: Mecanismo para establecer restricciones a los privados y una forma de promoción del uso sostenible de los recursos naturales.

⁷ Son foros que propician la discusión y debate de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional. Promueven la reflexión de los magistrados acerca de los temas que son materia de debate, en los cuales los participantes para su deliberación y fundamentación de criterios, han escuchado la exposición de los expertos en el tema. Esta actividad conduce al perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial.

Artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 1993 “El Perú es una república democrática y social “

El artículo 58 establece que “la iniciativa privada es libre y se ejerce en una iniciativa social de mercado.

En el plano laboral la Ley 29381(2009) ley de organización y funciones del ministerio de trabajo y promoción del empleo, señala como función exclusiva en el artículo 7.8: “promover normas y estándares nacionales de responsabilidad social empresarial en materia laboral”.

La Ley General del Ambiente desarrolla en el artículo 78 que: “El Estado promueve, difunde y facilita, la adopción voluntaria de políticas y prácticas y mecanismos de responsabilidad social empresarial, entendiendo que esta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones”.

En el derecho tributario junto a un fin recaudatorio, existen objetivos no fiscales, relacionados con la política económica de desarrollo del país, la posibilidad que los tributos puedan satisfacer, además de financiar el gasto público, otros objetivos, y los incentivos fiscales son una forma eficiente de promover la responsabilidad social empresarial.

Existen en Perú muchas normas sectoriales en el que se resalta la labor de obtener las empresas, la licencia social, para poder actuar en esa población o comunidad.

Es allí en la obtención de la licencia social, donde hay marcos jurídicos impuestos desde el Estado para que las empresas que desean operar primero cumplan las mismas y obtengan las autorizaciones del Estado.

En cuando a Derechos del Consumidor, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, es un organismo público

especializado del Estado Peruano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con personería jurídica de derecho público. Fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868 (1992).

De acuerdo a Barbachan (S.f.) La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú aún está en desarrollo, todavía hace falta que las organizaciones plasmen de manera asertiva sus programas y se logre mejores resultados. Sin embargo, no se puede desmerecer el hecho que poco a poco las organizaciones van comprendiendo que las políticas corporativas de sostenibilidad son fundamentales para mantenerse en el mercado.

Se insta a las empresas a que más allá de los cumplimientos y presentación de reportes de sostenibilidad, deben buscar mayor efectividad en sus programas, que las metas y estrategias a implementar estén más alineadas con los requerimientos de sus grupos de interés, sobre todo, que se pueda monitorear y medir los indicadores del impacto generados para tomar mejores decisiones en los siguientes programas corporativos de responsabilidad social.

5.7. Normatividad de la RSE en Argentina

En Argentina, la ley 25877 (2004) en su capítulo IV, artículo 25 estableció que las empresas que posean un número de trabajadores que superen los 300 deberán elaborar, anualmente, un balance social.

La ley 2594 de la Ciudad de Buenos Aires fue sancionada con fecha 6 de diciembre de 2007, pretende ser un paso en el camino de la RSE ya que tiene por objeto “la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables por parte de las organizaciones” en el marco del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA).

Conforme el artículo segundo, la presentación del BRSA es obligatoria para las empresas con más de trescientos (300) trabajadores y que posean una facturación que supere los valores

indicados para medianas empresas conforme la resolución SEP y ME 147/06. Para las restantes organizaciones será voluntaria.

En su artículo tercero establece la norma que las empresas que realicen la presentación voluntaria de los BRSA podrán gozar de beneficios promocionales relacionados con el acceso al crédito y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica u otros que podrá establecer la autoridad de aplicación (que en este caso es el Ministerio de Producción).

El ámbito de aplicación de la ley surge de su artículo cuarto, en cuanto establece que la ley comprende a “todas las empresas que tengan el domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y tengan su actividad principal en la ciudad con un año de actividad al momento de la vigencia de la ley, sean nacionales o extranjeras. Este doble requisito de domicilio legal y actividad con un mínimo de un año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta ser importante a la hora de determinar si corresponde o no la presentación obligatoria del balance social. (Fabris, 2008)

La ley 2594 avanza en el sentido de establecer estándares y parámetros de cumplimiento obligatorio u opcional para las diferentes organizaciones y contempla otorgamiento de beneficios para aquellas empresas que voluntariamente presenten su balance de responsabilidad empresarial y asuman mayores compromisos.

En términos generales como expresan Chumaceiro y Hernández (2016); el aporte de los Estados y gobiernos a la RSE se identifica con el imperativo moral, que en tiempos de globalización, se hace más exigible hacia el sector empresarial, y a los mercados. Las iniciativas de Gobiernos corporativos llevan a las empresas a mejorar la eficiencia de los mercados y al desarrollo de las sociedades. En el caso de los gobiernos nacionales y los países; capacitar a los ciudadanos para enfrentar a la sociedad del conocimiento, y en marcos regulatorios efectivos.

Se considera que la norma dictada busca imponer una obligación para las empresas sin analizar ni apalancar las reales ventajas que significa para las organizaciones incorporar RSE.

De acuerdo con Fabris (2008) En “argentina existen tres proyectos de ley con estado parlamentario que propugnan el establecimiento de la RSE de manera integral y con el carácter dado en la nueva ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un cuarto que la incorpora con el fin de erradicar el trabajo infantil.

También existe en la provincia de Buenos Aires un proyecto que establece la incorporación de manera voluntaria de la RSE y la confección de balances sociales y convoca a las empresas a la adhesión a la ley.”

6. Diseño metodológico

6.1. Tipo de investigación

Se aborda una investigación aplicada de tipo jurídica, en la que se desarrolla un trabajo analítico de revisión de estudios previos sobre la RSE, las normas existentes, principios constitucionales y pronunciamientos de las altas Cortes, sobre el tema propuesto, con el fin de llegar a la toma de conclusiones acordes con los objetivos propuestos en la investigación. Se trata de una investigación de tipo descriptiva, desde el punto de vista científico en donde se relaciona y recolecta información de carácter jurídico sobre el tema a tratar, para así describir lo que se investiga.

6.2. Método de investigación

Por el tipo de investigación, el método aplicado es el inductivo, la cual según González (2.013), es una forma de raciocinio o argumentación, que conduce a un análisis ordenado, coherente y lógico del problema planteado, el que toma como referencia premisas verdaderas.

6.3. Técnica y fuentes de investigación

La técnica utilizada es el método descriptivo, basada en datos cualitativos, en el que se recolecta información sobre las diferentes normas inherentes a la RSE existentes en Colombia, agrupados en cuatro áreas: derechos humanos, laborales, ambientales y lucha anticorrupción, con el fin de analizar estas facetas de la RSE y establecer un marco legal.

Conclusiones

En el presente trabajo se realizó el estudio sobre el alcance y efectividad de la RSE., con el fin de resolver la pregunta de hasta qué punto las disposiciones que rigen la materia en Colombia se encuentran reguladas; para ello, se entró a recopilar la normatividad relevante sobre los diferentes elementos que conforman la RSE, para establecer así, si en su conjunto constituyen una regulación de la RSE en Colombia, incluyendo también algunas reglamentaciones en el ámbito internacional, que nos ha servido para una mejor conclusión sobre el presente estudio.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tal como se le conoce hoy en día en Colombia, fue surgiendo por diferentes pronunciamientos, conceptos y documentos que a través del tiempo fueron formando su marco de referencia, centrando su atención en aspectos relacionados con los derechos laborales, humanos, medioambientales, comerciales y otros, que fueron creando un marco regulador, el cual se fue aplicando por las empresas, en algunos aspectos yendo más allá de lo establecido como obligatorio.

En el siglo XXI cobra importancia la RSE al ocupar un lugar central en las decisiones adoptadas por organismos internacionales, para los que la RSE, se fue convirtiendo en respuesta a situaciones problemáticas de diferentes comunidades alrededor del mundo. Así, este tema ha sido objeto de pronunciamiento por parte de importantes organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), diferentes organizaciones protectoras de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y numerosos Estados alrededor del mundo.

En cuanto a la definición de la RSE, encontramos que la Comisión Europea 2.001, señala que la RSE es la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas del sector en el cual se

relaciona, teniendo en cuenta el desarrollo integral de sus empleados, el aporte a la comunidad que le permite crecer y desarrollarse y el cuidado, respeto y preservación del medio ambiente. De acuerdo a lo consignado en el Pacto Global (ONU, 2004), “Ser socialmente responsable implica todo un modo de hacer negocios, que se manifiesta a través de las relaciones con la comunidad, el trato con los empleados y el respeto al medio ambiente”. La Norma ISO 26000, define la Responsabilidad Social Empresarial como “Las acciones de una organización para asumir su responsabilidad por los impactos que sus actividades tienen en la sociedad y el ambiente, las cuales deben ser consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible; estar basadas en el cuidado ético y cumplimiento con las leyes aplicables e instrumentos intergubernamentales y estar integradas en las actividades cotidianas de la organización”

La RSE surge por fenómenos como la globalización, las dificultades sociales de la población en numerosos países, las prácticas corporativas cuestionables, entre otros, lo que fue llevando a que, surgieran diferentes instrumentos que establecen directrices para promover un tratamiento adecuado en los diferentes Estados, encontrándose entre los más importantes el Global Compact o Pacto Global (ONU, 1999). Considerada actualmente como la iniciativa más importante del mundo en el campo de la RSE.

No obstante, la Responsabilidad Social Empresarial encuentra su fundamento primario en el derecho Internacional, específicamente en el Libro Verde de Responsabilidad Social de la Comisión Europea, publicado en el 2001.

En este orden, tomando el Pacto Global, observamos que ante el deber de respetar y proteger los derechos humanos fundamentales existen múltiples disposiciones vinculantes, obligatorias y, en consecuencia, exigibles tanto en el orden interno colombiano como en el

internacional. En Colombia, los fundamentos de la RSE parten desde el título primero de nuestra Constitución y se amplía con los mecanismos que integran el Bloque de Constitucionalidad (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, etc.), incluso, descendiendo en la pirámide normativa y tomando exclusivamente del derecho al trabajo (art. 25 CP), es notorio que en Colombia, las empresas deben observar las garantías contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, así como en todas aquellas normas que le sean concordantes.

En Colombia el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se originó de manera espontánea, inicialmente como proyección de algunos empresarios que consideraron que mejorando las condiciones laborales y el entorno de la comunidad, podían además de aportar bienestar a la sociedad obtener mejores resultados en sus empresas. De esas inquietudes surgieron importantes avances en el campo laboral, de la educación, salud, medio ambiente y como consecuencia de ello, se fue generando un mejoramiento social.

Como base esencial de la RSE, se encuentra la Constitución Política de 1991, la cual declaró que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual incluye las nociones de solidaridad y de justicia social que deben regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos o particulares; además, estableció responsabilidades sociales para la empresa y la propiedad, determinando la prevalencia del interés general o social frente al particular.

Asimismo, el tema de la RSE se encuentra estrechamente ligado al concepto de desarrollo sostenible contenido en la Ley 99 de 1993, cuando señala que: “Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades

Al estudiar de manera general, el marco de la regulación existente en Colombia respecto a los diferentes ámbitos que se relacionan con la RSE, encontramos que éstos se encuentran comprendidos en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual se deduce al delimitar el marco jurídico – legal de la RSE, dentro del cual se pudo establecer las regulaciones sobre los diferentes campos dentro de los cuales se desarrolla, que son:

- 1) Medio Ambiente;
- 2) Relaciones Laborales;
- 3) Campo Comercial;
- 4) Inversión Social, la cual se subdivide en Educación, Cultura, Vivienda y Salud.

Lo anterior, analizado desde los principios del Global Compact, agrupados en cuatro áreas: derechos humanos, laborales, ambientales y lucha anticorrupción, en donde se encuentra que las distintas facetas de la RSE se encuentran reguladas y comprendidos en mayor o menor medida en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual evidencia que la RSE no es totalmente voluntaria, que la amplia regulación jurídica en esta materia es de obligatorio cumplimiento y que esta obligatoriedad se complementa con la pequeña proporción de voluntariedad que sigue acompañando a la RSE.

Como vemos, en muchos países, algunas responsabilidades sociales básicas ya están normadas por leyes respaldadas por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia laboral o resguardada por una ética y práctica común que beneficia a la comunidad de los Países. Son normas casi universalmente aceptadas y respetadas. En este sentido, la Unión Europea, en el Libro Verde del 2001 sobre RSE,

consideraba que los países que carecieran de estas leyes básicas tendrían que dotarse de ellas para que la responsabilidad social empresarial pudiera desarrollarse óptimamente. Se podría argumentar que estas normas son los cimientos para que la RSE pueda seguir evolucionando y alcanzando más metas sociales y medioambientales.

Expuesto de manera general, el marco de la regulación en Colombia respecto al desarrollo legal que han tenido los diferentes ámbitos que se relacionan con la RSE., así como presentado algunas reglamentaciones en el ámbito internacional, se ha encontrado que los instrumentos normativos vinculantes son numerosos, ello debido a los esfuerzos legislativos de los diferentes estados, que buscan incorporar normas encaminadas a proteger los elementos que conforman la RSE. Esto a pesar de que la evolución de la RSE ha sido rápida y la ley no ha seguido este ritmo, siendo la razón por la que aún no se encuentran normados todos los aspectos para su práctica, pero aunque la ley estaría rezagada en relación a los avances de la sociedad moderna, hemos apreciado un gran desarrollo normativo, siendo así, que las normas emitidas en Colombia sobre los diferentes sectores, como: salud, vivienda, comercio, medio ambiente, laboral, financiero, etc., antes o después del Global Compact o Pacto Global de la ONU, 1999 o del Libro Verde de Responsabilidad Social de la Comisión Europea, publicado en el 2001, conforman con el bloque constitucional, la normatividad de la RSE.

Nuestro estudio concluye que si bien, no existe en Colombia una regulación específica que tenga como centro la Responsabilidad Social Empresarial, como ocurre en países como India, Indonesia y la Unión Europea, los principales aspectos de la RSE como: derechos humanos, relaciones laborales, comerciales y medioambientales son materias suficientemente legisladas en Colombia, En cuanto a las relaciones en el Campo Social, como salud, vivienda, educación y cultura, existen muchos ámbitos regulados, no obstante el problema es que, el desarrollo de la

humanidad las leyes se van haciendo insuficientes, por lo que siempre habrá necesidad de nuevas leyes que tengan por fin satisfacer las necesidades básicas de la población.

Referencias

Acevedo Guerrero, J. A., Zárate Rueda, R., & Garzón Ruiz, W. (2013). "Estatus jurídico de la responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia". *Dikaion*, 303-332.

Argandoña, A. (1998). La Teoría de los Stakeholder y el Bien Común. *Documentos de investigación*, 13.

Barbachan, M. (S.F) La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú: Desafíos y Oportunidades Recuperado el 18 de diciembre de 2017 en revistas.pucp.edu.pe/index.php/innovag/article/download/18749/18989

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2014). Conozca la nueva Ley de Responsabilidad Social Empresarial "obligatoria" de la India. Recuperado el 15 de octubre de 2017 en <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ley-responsabilidad-social-obligatoria-india>

Bernal, C. P. (2005). *El derecho de los derechos* (1a ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bocella, F. A. (s.f.). Responsabilidad social empresarial. *Gestión y Desarrollo Gerencial*, 9.

Caferratta, N. (2007) De la efectividad del derecho ambiental. La Ley, 2 de octubre de 2007. Buenos Aires recuperado el 26 de septiembre de 2017 en https://www.researchgate.net/publication/313487734_El_camino_hacia_la_efectividad_del_derecho_ambiental

Caneda, M. C. (2004). *La responsabilidad social corporativa interna*. España: Esic.

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility. *Business & Society*, 268-295.

Correa, J. (2007) Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial y balance social. Recuperado el 3 de mayo de 2016 en <http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v10n20/v10n20a6.pdf>

Chirilo, J. B. (2011). La Responsabilidad social de la empresas y la cultura de certificacion. *Atlantic Review of Economics*, 20.

Chirinos, M. E., Fernández, L., & Sánchez, G. (2012). Responsabilidad empresarial o empresas socialmente responsables. *Razon y Palabra*(81), 1-18.

CHUMACEIRO HERNÁNDEZ, Ana; HERNÁNDEZ de VELAZCO, Judith. Países generadores de políticas públicas para el fomento de la cultura empresarial dirigida hacia la responsabilidad social. *Telos*, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 103 - 120, ene. 2016. ISSN 2343-5763. Disponible en: <<http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/790>>.

Comisión Europea. (2001). *Libro Verde, Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social* Recuperado en Abril de 2013 de, http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/n26039_es.htm.

Corona. (2013) Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Recuperado en Mayo de 2013 de, <http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/responsabilidad-social-empresarial>

Correa, J. (2007). Evolución histórica de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y Balance Social. *Redalyc*. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 10 (20), 87-102.

Corte Constitucional, T-14 (Corte Constitucional de Colombia 1994).

Departamento del Trabajo de Estados Unidos - Guía Práctica Referente a la Ley de Normas Justas de Trabajo (2014) Compliance Assistance - Wages and the Fair Labor Standards Act

(FLSA). Recuperado el 7 de Enero de 2017 en

<https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/hrgSpanish.htm>

Esteban, E. G. (1999). La empresa ante sus grupos de interes. *Papeles de Etica, Economia y Direccion*, 1-14.

Fajardo, M. (2015) Efectividad regulatoria de la responsabilidad social empresarial en Colombia. En *Criterio Jurídico Garantista*. (Jul.-Dic. de 2015). Vol. 8, n.o 13, 130-155. issn: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.

Fabris, L. (2008) La Responsabilidad Social Empresaria y la Ley 2594 de la Ciudad de Buenos Aires recuperado el 5 de junio de 2018 en <http://www.codigor.com.ar/brsa.htm>

Fernandez, F. (2002). El analisis de contenido como ayuda metodologica para la investigación. *Ciencias Sociales*, II(96), 35-53.

Franco, Betancur & Posada (2014) La responsabilidad social empresarial: una mirada desde el cooperativismo recuperado el 3 de marzo de 2017 en <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/132/260>

Gallardo, Y. P., & Moreno, A. (1999). *Aprender a Investigar*. Santa Fe de Bogota: Arfo Editores.

Garcia, C. (2012. p 261.). *Recursos Humanos y responsabilidad social corporativa*. España: McGraw-Hill España.

Gonzalez, M. (2013). Diseño Metodologico. *Diseño Metodologico*, (págs. 1-55). Barranquilla.

Gutiérrez, R., Avella, L. & Villar, R. (2006). Aportes y desafíos de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. Bogotá: Corona.

Hernández, H. & Jiménez, A. (2015). Responsabilidad social empresarial zona urbana del distrito de Barranquilla: estudio etnográfico. *Económicas CUC*, 36 (2), 9-18

Ibarra, A. (2014) “Principios de la responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano” *Revista de Derecho*, No 41 Volumen n.º 41, enero-junio de Universidad del Atlántico (Colombia) De,

<http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/5443/6600>

Icontec (2011). Guía Técnica Colombiana 180 de Responsabilidad Social. Recuperado el 14 de octubre de 2015 en <http://www.icontec.org.co/index.php?section=367>

Infante, C. (2010). *Guia para la presentacion de proyectos de investigación*. Bogota: Universidad Nacional .

Juliao, C. (2012). Metodologia de Investigación. *Metodologia de Investigacion* (págs. 1-50). Bogota DC: Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- ACAC.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, (2015). Recuperado el 14 de julio de 2016 en <http://www.empleo.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf>

Momberg, M. R. (2006). *Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja competitiva*.

Navarro, F. (2012). *Responsabilidad Social Corporativa*. Madrid: ESIC EDITORIAL.

Nieto Antolin , M., & Fernandez Gago, R. (2004). Responsabilidad social Corporativa: La ultima innovacion en management. *Universia Business Review*, 28-39.

Nieto, M., & Fernandez, R. (2004). Responsabilidad social Corporativa: La ultima innovacion en management. *Universidad Business Review*, 28-39.

Núñez, E. y Ravina, R. (2017). Análisis del nivel de competitividad empresarial en el panorama publicitario colombiano fundamentada en el éxito creativo y la responsabilidad ética y

jurídica. JURÍDICAS CUC, vol. 13, no. 1, pp. 9-28.

DOI:<http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.1>

OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es>

OJEDA MESTRE, R. (2005) El Derecho Ambiental del Siglo XXI, en Medio Ambiente & Derecho, Revista Electrónica de Derecho Ambiental, Universidad de Sevilla, N.º 11 recuperado el 20 de julio de 2016 en <https://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/Las%20cien%20caras%20del%20Derecho%20Ambiental.htm>.

PACTO GLOBAL. (s.f.). Recuperado el 08 de ENERO de 2014, de <http://www.un.org/es/globalcompact/>

Pérez, M. & Morales, J. (2011). Revisión de los orígenes de la responsabilidad social empresarial en el sector salud en Colombia. Recuperado el 20 de Julio de 2016 de <http://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/59/695>)

Rodriguez, G., Gil, J., & Garcia, E. (1996). *Metologia de la Investigacion*. Aljibe.

Rojas, A. L. & Olaya, J. E. (1999) Responsabilidad Social Empresarial: su origen, evolución y desarrollo en Colombia. Foro Económico Mundial. Recuperado en Mayo de 2013 en <http://redunirse.org/nuevo/sites/default/files/pdf/Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20su%20origen,%20evoluci%C3%B>

Sampier, R. H., Fernandez, C., & Batista, P. (1998). *Metodologia de la Investigacion*. Mexico: Mc Graw Hill.

Sulbaran, J. P. (1995). El concepto de responsabilidad social de la empresa. *Revista de Economía N° 10*, 181-199.

Sulbaran, J. P. (s.f.). El concepto de responsabilidad social de la empresa. *Revista de Economía N° 10*, 234.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2014) cartilla ley 1480 de 2011, en <http://www.sic.gov.co/estatutos-consumidor>. recuperado el 3 de enero de 2018.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (Bogotá, 2017) Protección al consumidor en colombia- una aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, en [http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Proteccion_al_Consumidor_en_Colombia_julio27_2017\(1\).pdf](http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Proteccion_al_Consumidor_en_Colombia_julio27_2017(1).pdf)

Tamayo, M. T. (1998). *APRENDER A INVESTIGAR*. Santa fe de Bogota: Afro Editores.

Taylor, S., & Bogdan, R. (1992). *Introduccion a los metodos cualitativos en investigacion. La busqueda de los Significados*. España: Paidós.

Vazquez, O. (2006). RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:. *Revista de Relaciones laborales*, 13-26.
